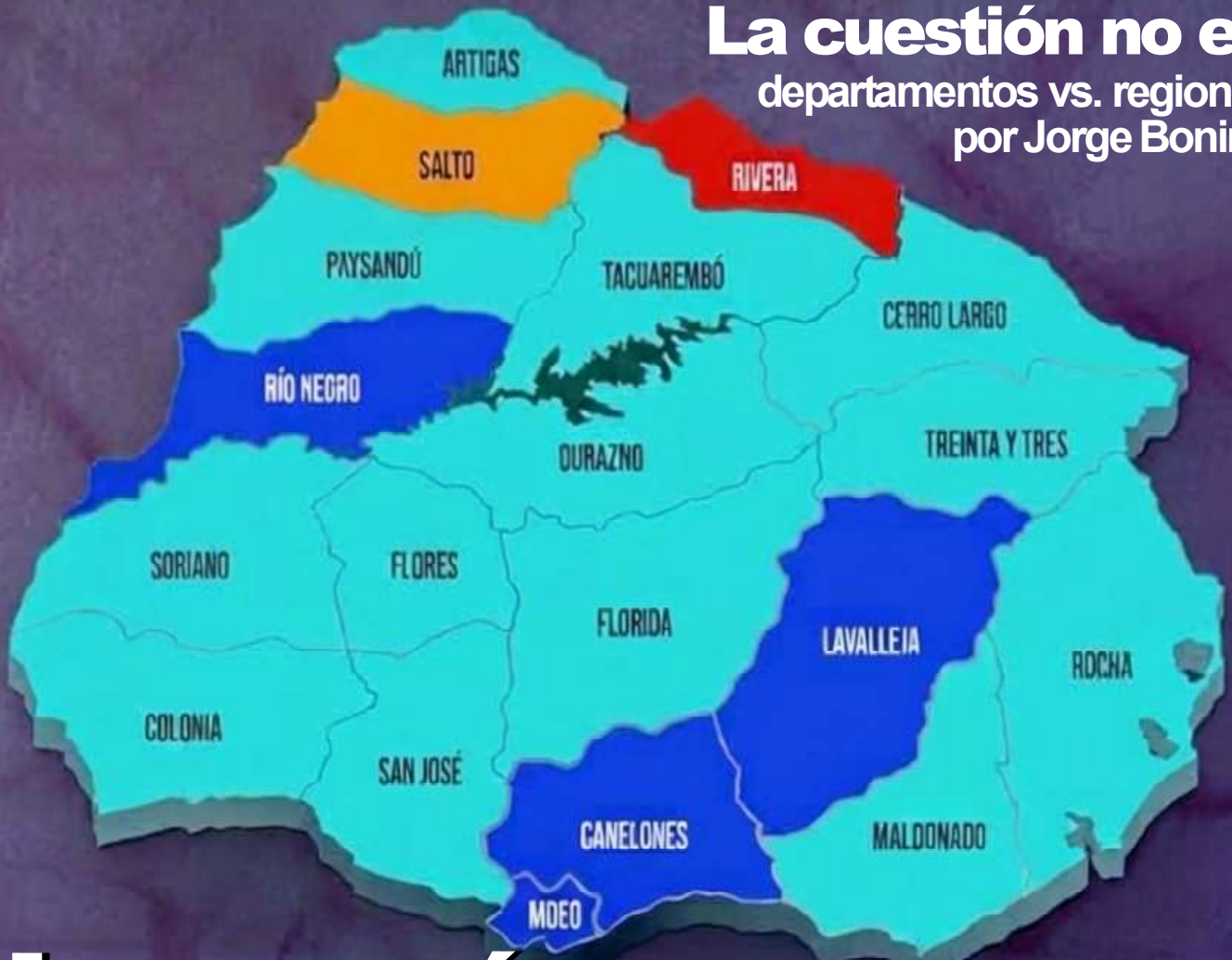
EDICIÓN I 848 del Lunes 2 de noviembre de 2026

Opinar

La fuerza de las Ideas

La cuestión no es
departamentos vs. regiones
por Jorge Bonino



La manía bipartidista del Uruguay fragmentado
escribe César García Acosta

La soberbia también tiene memoria
Ricardo ACOSTA

Lula o Bolsonaro, dos barcos que no quiero abordar
Daniel MANDURÉ

La lectura amenaza convertirse en un privilegio
Eduardo Irigoyen

La derechización tardía. Por Eduardo Fazzio

La manía bipartidista del Uruguay fragmentado

El concepto de la **«manía bipartidista» en un Uruguay fragmentado** se refiere a la persistencia cultural, discursiva y estructural de analizar la política uruguaya bajo el esquema tradicional de dos grandes bloques (históricamente Blancos y Colorados, y actualmente la Coalición Republicana y el Frente Amplio), a pesar de que la sociedad y el electorado muestran una fragmentación y diversidad crecientes.

Esta realidad que no es casual, sino causal, tiene casi siempre el rol protagónico de los políticos de turno, quienes si son líderes o caudillos apalancan posiciones más estructuradas desde las internas partidarias, que cuando tienen por voceros a personas sin la debida legitimidad ideológica, sólo terminan siendo un factor de distorsión y confusión que sólo alientan los radicalismos.

Quizá el partido Colorado institucional se de cuenta que ya es hora de abrirse hacia las bases y entienda su obligación de obviar las representaciones a los pocos cargos que representan nuestra votación.

Para crecer hay que imaginar un escenario diferente.

Los siguientes son algunos de los argumentos principales que justifican este diagnóstico:



Cesar GARCÍA ACOSTA
Editor del semanario OPINAR
Técnico en Comunicación Social

Inercia de la matriz identitaria histórica

Bipartidismo fundacional: Uruguay se construyó sobre las identidades del Partido Nacional y el Partido Colorado. Aunque el sistema real sea hoy de bloques o pluripartidista, la narrativa pública recurre constantemente a la lógica binaria «nosotros contra ellos» porque es la estructura cognitiva más cómoda y arraigada en la historia del país.

El reflejo mediático y analítico: Existe una tendencia en los formadores de opinión y analistas a simplificar el tablero político en dos polos homogéneos, ignorando los matices internos y las fracturas identitarias que existen dentro de cada sector.

La ilusión de la homogeneidad de los bloques

Diversidad interna oculta: Calificar la política actual como un simple bipartidismo (Coalición vs. Frente Amplio) es una simplificación extrema. La Coalición Republicana, por ejemplo, alberga desde la centroderecha liberal hasta el nacionalismo populista y la derecha conservadora.

El Frente Amplio como coalición: El propio Frente Amplio es históricamente una coalición de partidos que va desde la socialdemocracia hasta el marxismo. Tratar a estas mega-alianzas como dos «partidos tradicionales» ignora las intensas negociaciones y fragmentaciones internas que definen el día a día legislativo.



Emergencia de nuevas identidades y «terceros partidos»

Disrupción del centro y las periferias: La aparición y consolidación de partidos como Cabildo Abierto o el Partido Independiente (y fenómenos anteriores como el Partido de la Gente) demuestran que el electorado busca opciones fuera del eje binario tradicional.

Voto volátil y fragmentado: Un sector importante de la sociedad ya no hereda la camiseta partidaria de sus familias. El aumento de los votantes indecisos y el cruce de votos entre elecciones nacionales y departamentales justifican la idea de un electorado fragmentado que la «manía bipartidista» se obstina en encasillar.

Fragmentación social y cultural subyacente

Uruguay ya no es unánime: El Uruguay hiper-integrado de mediados del siglo XX ha dado paso a una sociedad fragmentada en lo socioeconómico, lo territorial (la brecha entre Montevideo y el interior, o entre la costa y la periferia) y lo generacional.

Demandas atomizadas: Los problemas de seguridad, empleo juvenil, agendas de nuevos derechos y realidades del empleo informal generan tribus urbanas y grupos de interés cuyas demandas no se alinean limpiamente con la vieja división binaria del espectro político.

El diseño institucional que fuerza la polarización

El balotaje como distorsión: El sistema de doble vuelta presidencial (balotaje) obliga artificialmente a la sociedad a dividirse en dos mitades en la recta final de las elecciones. Esta regla institucional alimenta la «manía» de pensar el país en dos mitades, cuando la primera vuelta y la composición del Parlamento reflejan una fragmentación mucho mayor.

Desde esta columna de opinión no pretendemos más que ser una voz en la búsqueda del consenso necesario que nos ubique a los colorados y fundamentalmente a los batllistas, en el plano de las ideas, la innovación y las reformas. De no ser así, un partido sin ideas carece de los acuerdos necesarios que son la herramienta para juntar voluntades.

Se necesitan utopías, así que como decía André Breton «seamos realistas, pidamos lo imposible» y procuremos conformar una plataforma de mínima que sirva al sentimiento colorado.

Lo demás lo pondrá la gente.

partido COLORADO | LA SEMANA
Noticias y actividades del Partido Colorado

CONTENIDOS

2 La manía bipartidista del Uruguay fragmentado. **CÉSAR GARCÍA ACOSTA 3** La cuestión no es: departamentos versus regiones. **JORGE BONINO 4** La magia de la lectura y una vida plena. **DAVID AURIS VILLEGAS 4** Besame mucho. **CHICOLARAYA 5** La movilidad eléctrica como causa nacional. **PABLO CAFFARELLI 5** La soberbia también tiene memoria. **RICARDO ACOSTA 6** Brasil: Lula o Bolsonaro, dos barcos que no quiero abordar. **DANIEL MANDURÉ 7** Retiro jubilatorio a los sesenta años. **MARCELO GIOSCIA 8** La derechización tardía, **EDUARDO FAZZIO 9** La lectura amenaza con convertirse en un privilegio. **EDUARDO IRIGOYEN 10** El caos como política. **CLAUDIO RAMA 11** «A rajar, dijo Flavio Bolsonaro y se voló». **ZÓSIMO NOGUEIRA 12** La libertad en la hoguera. **GUZMÁN A. IFRÁN 13** «Medio término»; redefiniendo relaciones internacionales. **LORENZO AGUIRRE 14** ¿Qué ve Japón en América Latina? **FITZGERALD CANTERO 15** Sin inteligencia artificial. **GUSTAVO GÓMEZ RIAL 16** ¿Pedro III o Lula 4? **JULIO MARÍA SANGUINETTI**

Redactor Responsable
Tcs César GARCÍA ACOSTA.
Domicilio:
Martín C. Martínez 1630/401
Montevideo-Uruguay
Teléfono:
098686686
Registro MEC
Nº 2169/07, Tomo VI, fs. 388
Registro de Ley de Imprentas
Web: opinar.com.uy
Contacto:
cesargarciacosta@gmail.com





Jorge BONINO
Contador Público. Periodista

La cuestión no es departamentos versus regiones

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera revivió recientemente una de las tantas propuestas con las que José Mujica solía sorprender y captar la atención pública: ir hacia una regionalización del país, suprimiendo varios departamentos, intendencias y juntas departamentales.
La idea de la regionalización del país no es en absoluto nueva, no solo porque ya la hubiera manejado en su momento Mujica, sino porque desde el año 1885, cuando quedaron definidos los actuales 19 departamentos, varios actores políticos y sociales la han planteado en diversas oportunidades y circunstancias, con características diferentes según los correspondientes protagonistas.
Tampoco la propuesta de la regionalización en base a similares matrices productivas fue una idea originaria de Mujica (retomada ahora por Viera), sino que ha sido planteada en diversas ocasiones y fue incluso puesta en la práctica durante la última dictadura que sufrimos los uruguayos.
A instancias de una estrategia de desarrollo diseñada en base a las jurisdicciones de las regiones militares, a mediados de la década de 1970 se definieron diversos planes locales, como por ejemplo el Plan Norione (Norte del Río Negro), que tuvo a sus vez planes focalizados en zonas concretas de la región, como el Plan Verno (Vértice Norte)



que fue uno de los que en su momento tuvo mayor impacto, con un foco muy importante en Bella Unión. Allí se pusieron en marcha diversos proyectos productivos que fracasaron rotundamente a mediano plazo, aunque algunos de ellos siguieron funcionando incluso por algunos años después de la reinstitucionalización del país, siempre sustentados por fuertes subsidios y sin posibilidades reales de desarrollo sostenible.

La dictadura probó por un camino parecido

¿Qué busca promover el mencionado senador con esta «remake emepepista»? Según se puede deducir de sus palabras: achicar el costo del Estado mediante la supresión de alrededor de la mitad de las Intendencias y Juntas Departamentales («ocho o nueve»), impulsar el desarrollo de zonas productivas con similares características (arrocera, quesera, etc.) y para mantener la proximidad con la ciudadanía a través de una mayor municipalización del territorio.
Por lo tanto, propone por un lado achicar el Estado y por otro agrandarlo; por un lado centralizar el poder por regiones y por otro descentralizar la gestión con más Municipios. Parece una fórmula tan sencilla como poco eficaz y eficiente, por lo menos para alcanzar los fines que se dice perseguir.
Uruguay nació como República con una división territorial establecida por la Constitución de 1830, que determinó la existencia de nueve departamentos y habilitó la modificación administrativa del territorio por vía de la ley. La reforma constitucional de 1918 eliminó la referencia específica a la cantidad de departamentos y la de 1967, además de suprimir el gobierno colegiado departamental y restablecer la figura del intendente, determinó la necesidad de contar con dos tercios de los votos de cada Cámara para poder modificar la cantidad de departamentos y los límites territoriales. Con eso se buscó dar una cierta estabilidad al mapa político del país. Finalmente la reforma constitucional de 1996 institucionalizó el Congreso de Intendentes y con ello la promoción de acciones coordinadas , en temas fundamentales para la gestión de las Intendencias, y también creó la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por seis Intendentes y seis representantes de igual número de Ministerios, bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como ámbito especializado en el cual se aprueban los proyectos que tienen como fuentes de financiamiento recursos de origen nacional.
Hoy existen diversas vías de coordinación (formales e informales) entre Intendencias y entre Municipios, por ejemplo a través de acuerdos directos, de resoluciones del Congreso de Intendentes y de proyectos aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización. Sin embargo, aún siguen siendo escasas las experiencias de desarrollo regional y se limitan básicamente a algunas obras de infraestructura o de política ambiental.

Hay que enfocarse en lo sustancial

Ahora bien, la pregunta es si ¿resultan suficientes las herramientas disponibles para un desarrollo sostenido y sostenible, sobre todo en aquellas partes del territorio nacional donde las carencias son mayores y donde la incidencia de factores exógenos, como, por ejemplo, la existencia de una frontera seca que nos expone a la influencia de un gigante como Brasil? Sin dudas la respuesta es negativa. Las estructuras actuales, aunque han permitido ciertos avances en la coordinación de políticas públicas transversales, carecen de la autonomía financiera y los procedimientos y procesos institucionales imprescindibles para eliminar las asimetrías existentes en el país.
La propuesta de Nicolás Viera, si bien se presenta bajo el barniz de la modernización administrativa y el ahorro fiscal, no se enfoca en lo sustancial, que no es la cantidad de departamentos, sino la asignación de competencias, los recursos disponibles para atender las obligaciones emergentes y la calidad del gasto que se genera en el territorio.
Reducir el número de intendencias para ampliar el de los municipios, en el mejor de los casos, tendría un efecto presupuestal neutro (ni por casualidad se puede pensar que habrá una reducción por ese mecanismo), puesto que a lo sumo habría alguna disminución de la cantidad cargos políticos y de particular confianza, lo que seguramente podría caer muy bien en oídos de la opinión pública, pero que pasado a los papeles poco y nada aportaría a un objetivo de contracción del gasto.
Por otra parte -y para nada deleznable-, una regionalización impuesta que suprimiera departamentos generaría la pérdida de identidad histórica de comunidades que ya tienen un claro sentido de pertenencia.
La experiencia histórica nos demuestra que los proyectos de desarrollo verticalistas, como los ensayados durante la dictadura, suelen fracasar cuando la participación social es sustituida por la planificación técnica centralizada. Para que una regionalización productiva sea efectiva, esta no debe imponerse desde una ley que borre fronteras en un mapa, sino que debe surgir de incentivos económicos claros que fomenten la asociación voluntaria de los gobiernos departamentales en consorcios regionales, manteniendo su autonomía pero unificando sus agendas de inversión.
La verdadera descentralización no pasa por la cantidad de instituciones o jerarcas de gobierno que existan, sino por qué vía se se puede alcanzar la equidad, para que todos los habitantes del país accedan a las mismas oportunidades de desarrollo, cualquiera sea su lugar de residencia y/o trabajo

Primero erradicar asimetrías estructurales

Las asimetrías estructurales evidentes en que se deben desenvolver las actividades en los departamentos fronterizos, cuyas economías locales quedan supeditadas a variables como el tipo de cambio y las políticas fiscales del país vecino, sin capacidad alguna de respuesta institucional, afectan gravemente al comercio minorista, son una barrera de tremendo peso para la inversión y la innovación, y exponen a toda la población a una vida laboral extremadamente limitada en el campo formal y a una acentuada vulnerabilidad cuando el refugio o la única opción real es la informalidad.
Si se interpreta el planteo del senador Nicolás Viera como un camino de búsqueda hacia una mejor administración de los recursos públicos desde el territorio mismo, se puede pensar en otras formas de procurar ese objetivo sin pensar en eliminar departamentos e instituciones, aunque sí podría pensarse en racionalizar lo que ya existe.
Lo razonable sería transitar hacia una lógica de coordinación y cooperación regional, tanto a nivel de las Intendencias como de los Municipios, pero sin sustituir formas de gobierno que han demostrado funcionar bien en general, para atender las necesidades de la gente desde la capacidad institucional y presupuestal con que cuentan. Mucho menos ayudaría al objetivo planteado la creación de superestructuras que atenten contra la eficiencia del gasto público, que ya de por si es escasa en toda la administración pública.

Ni supresiones ni superestructuras

¿Cómo podría entonces funcionar una regionalización con las instituciones que ya existen? Pues básicamente con coordinación y compartiendo recursos. Para ello alcanzaría con que por ejemplo a nivel de cada región existiera una junta honoraria, integrada por todos los intendentes de dicha región, con una presidencia rotatoria en forma anual, por ejemplo, para asegurar la transparencia, el equilibrio y la ejecutividad de la gestión. Esa junta aprobaría las acciones conjuntas a llevar adelante por dos o más departamentos de la respectiva región, dialogaría y negociaría con los poderes públicos. A los efectos prácticos, los departamentos de cada región deberían compartir capacidades técnicas, funcionarios y equipamiento.
Obviamente se necesitaría un cierto marco jurídico para una actuación regional de ese tipo, pero asegurando la vigencia de las autonomías departamentales.
Con una línea de trabajo que vaya por el camino señalado no habría un aumento de gastos, sino por el contrario una racionalización, sobre todo en el uso de equipos de alto costo y en la contratación de técnicos especializados.
Una reforma de la gobernanza a nivel departamental requiere de un análisis mucho más profundo y de una evaluación con criterio amplio de pro y contras de eventuales alternativas. Por ejemplo, habría que ver la justificación de que exista la misma cantidad de ediles en departamentos con superficies tan diferentes y sobre todo, con cantidades de habitantes tan desiguales. Eso implica también evaluar la racionalidad y/o conveniencia de la existencia de costos de funcionamiento institucional similares en situaciones reales tan diferentes.
También habría que evaluar la pertinencia de mantener la mayoría automática en la Junta Departamental del partido ganador de la elección, lo que si bien buscar asegurar la gobernabilidad, muchas veces se convierte en una barrera para el efectivo control de la oposición, cuestión central para la verdadera vigencia de un estado democrático y republicano.
El tema de la regionalización como vía de impulso al desarrollo local es por demás importante y el sistema político debería encararlo con seriedad y profundidad antes de seguir diseminando municipios en el territorio, con criterios poco claros y una gran falta de capacidad administrativa, técnica y de gestión.

David Auris Villegas
Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario. Creador del ABDIVCPCE.
davidauris@gmail.com

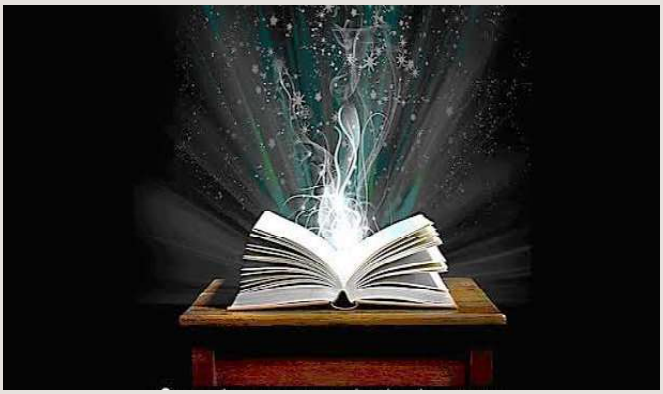


La magia de la lectura y una vida plena

«¡No tengas miedo de leer!», solía gritar mi abuelo al verme tímido. «Te estás perdiendo la fiesta de la vida», agregaba antes de acostarse, feliz, en su cama atestada de libros antiguos. Hoy disfruto aquellos textos y agradezco que transformaron mi vida y me permitieron hacer lo que más me encanta: leer y escribir para vivir mejor.

Sin embargo, no podemos permanecer tranquilos, tocando la lira cultural como Nerón mientras el mundo arde entre tecnología e incertidumbre. Los conocimientos cambian velozmente y surgen nuevos desafíos. Frente a esta realidad, la lectura activa constituye un pasaporte hacia una vida más plena y consciente.

En efecto, leer es emprender un viaje fascinante hacia las fibras íntimas del pensamiento y del corazón. Nos permite disfrutar aventuras, descubrir mundos, afrontar desafíos y alimentar fantasías que enriquecen nuestra existencia. Como



sugiere Borges, la lectura puede ofrecernos felicidad y goce, además de inspirarnos a vivir extraordinariamente, pese a las distracciones cotidianas.

Precisamente, ¿qué tienen en común la aparente torpeza de Borges y el delirante espejismo de don Quijote? No los juzguemos ligeramente: ambos revelan el poder de la imaginación. La lectura constante fortalece la inteligencia, estimula el pensamiento crítico y despierta la creatividad, capacidades indispensables en esta era del conocimiento.

Asimismo, leer amplía nuestra curiosidad y perspectiva para comprender la realidad. Una lectura sostenida, reflexiva y selectiva, centrada en nuestros intereses, permite profundizar en campos, adquirir conocimientos y desarrollar una voz propia. Así podemos convertirnos en referentes de una materia y afrontar mejor los desafíos de la globalización.

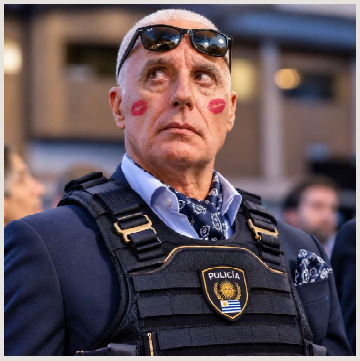
Además, la lectura significativa impulsa nuestro desarrollo personal: mejora la comunicación, enriquece el vocabulario y fortalece la comprensión de los demás. También contribuye a reconocer y gestionar nuestras emociones, favorece la empatía y nos ayuda a responder ante situaciones inesperadas.

Por otra parte, cultivar el hábito lector es una forma de ejercitar el cerebro. La investigación señala que leer estimula la memoria, la atención y las habilidades lingüísticas; también puede favorecer el bienestar y reducir el estrés. Hagamos de los libros compañeros cotidianos, sin atribuirles propiedades milagrosas.

Finalmente, leer nos convierte en ciudadanos libres, cultos, creativos y críticos. Como sostenía Freire, comprender la palabra y el mundo nos compromete a transformarlo, liderando éticamente nuestra sociedad hacia el bien común. ¡Abramos un libro y transformemos nuestra vida!

Bésame mucho:

entre chalecos, cámaras y cachetes Charlie Black a quien no se le escapa una sola tortuga



Chico La Raya

Desde que asumió la cartera del Interior, «Peaky Blinders» Negro ha aparecido en cuanta menesunda policial se haya mostrado por televisión.

El canoso exfiscal mantiene, además, un rigurosísimo criterio de vestimenta, digno de un vestuarista de televisión. Alterna finos trajes, siempre impecables, con pañuelos cuidadosamente combinados y, cuando la situación lo amerita, un perfecto sport fino: ropa al tono, camperitas tipo polo y unos Ray-Ban del posta, posta… de esos comprados en Estados Unidos.

Nada parece quedar librado al azar. Ni siquiera el vestuario.

Otra de las particularidades de Charlie Black es el cariño, casi desbordante, que profesa por todos los presentes en las escenas del crimen.

No deja cachete sin besar.

Desde el primero hasta el último de los policías, pasando por los funcionarios, la gente que anda por ahí y las vecinas que se acercan a curiosear. Y, si lo dejaran, seguramente hasta les daría un beso a los detenidos.

Amoroso, el canoso ministro.

También resulta admirable su devoción por estar presente. Su arrojo. Su entrega. Su capacidad para no perderse absolutamente nada.

¡No se le escapa una sola tortuga!

Está en todas.

Camiones blindados, anuncios de incautaciones de drogas, operativos policiales, detenciones, conferencias de prensa y explicaciones de todo tipo para justificar los deslices de su gestión.

Pero la última perla del collar de Negro merece un capítulo aparte: la presentación pública de chalecos antibalas, con diez policías utilizados como modelos para exhibirlos, en un acto que pretendió revestirse de especial trascendencia.

He visto, desde el retorno de la democracia, ministros del Interior de todos los colores, estilos y capacidades.

Incluso recuerdo aquella pintoresca aparición de Daisy Tourné a caballo, encabezando una marcha policial.

Pero organizar una movida pública, con convocatoria a los medios de comunicación, para mostrar chalecos antibalas constituye una extravagancia difícil de superar.

Porque los chalecos antibalas son parte del equipamiento habitual de la Policía.

Como lo son los zapatos, las armas, los gorros o las cachiporras.

Son herramientas de trabajo. Elementos de protección que el Estado tiene la obligación de proporcionar a sus funcionarios.

No son un acontecimiento extraordinario ni un logro ministerial que merezca semejante despliegue escénico.

La gestión de un Ministerio del Interior debería medirse por sus resultados: la reducción de los delitos, la prevención, el esclarecimiento de los crímenes, la seguridad de los ciudadanos y las condiciones de trabajo de los policías.

No por la cantidad de cámaras que acompañan al ministro ni por la prolijidad con que combina sus pañuelos.

Mucho menos por la espectacularidad de una ceremonia para exhibir elementos que deberían formar parte de la dotación normal de cualquier efectivo.

Solo espero que esta creciente vocación de broadcasting de Charlie Black no termine convirtiendo cada obligación administrativa del Ministerio en un acontecimiento televisivo.

Porque, a este paso, cualquier día nos convocan a una conferencia de prensa para anunciar que llegaron los zapatos nuevos de la Policía.

Eso sí: con el ministro impecablemente vestido, los Ray-Ban a mano y un beso para cada uno de los presentes.



Pablo CAFFARELLI
Abogado, Escribano. Escritor

La movilidad eléctrica como causa nacional

El mercado automotor uruguayo atraviesa una transformación inédita. El dinamismo de las ventas de vehículos eléctricos -que en los últimos meses alcanzaron más del cincuenta por ciento de las matriculaciones de cero kilómetro- demuestra una receptividad extraordinaria por parte de la sociedad hacia la tecnología limpia. Sin embargo, este impulso amenaza con frenarse debido a una visión fiscal de corto plazo que busca anticipar la quita de los estímulos tributarios.



El anuncio de la aplicación escalonada del IMESI a partir de enero de 2027 y las discusiones en el Congreso de Intendentes para elevar la Patente de Rodados a las unidades eléctricas responden a una lógica de equiparación prematura. Se argumenta la necesidad de compensar las pérdidas de recaudación derivadas de la menor venta de combustibles fósiles. Se pretende tratar a una tecnología estratégica y emergente como si fuera un mercado plenamente maduro, retirando los apoyos precisamente cuando el cambio de matriz adopta su dinámica más resolutiva.

Este enfoque pierde de vista la posición geopolítica y económica de la República. Uruguay no produce petróleo (está en su búsqueda pero sigue sin encontrarlo); la totalidad del crudo procesado para mover el transporte tradicional debe ser importada con una erogación masiva de divisas. En contrapartida, el país ha logrado una proeza reconocida internacionalmente: una matriz de generación eléctrica casi cien por ciento sustentable y renovable. Cada vehículo a combustión que se reemplaza por uno eléctrico transforma una dependencia del petróleo extranjero en consumo de energía soberana, generada por nuestro viento, nuestro sol y nuestra agua.

Antes de concentrar los esfuerzos en incrementar la carga sobre los contribuyentes, el Estado debe proyectar la movilidad eléctrica como una oportunidad de negocios extraordinaria. Uruguay cuenta con las garantías jurídicas y la infraestructura técnica necesarias para transformarse en el eje de la movilidad limpia en el continente. Ello requiere promover la instalación de plantas de ensamblaje en régimen de zona franca, atraer a los grandes fabricantes para constituir en el territorio un centro de distribución regional de vehículos y repuestos, y liderar la normativa ambiental y de infraestructura de carga en la región.

Por otra parte, en mérito a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la ONU instó a los países desarrollados a dejar de fabricar coches de combustión a partir de 2035 y a países en desarrollo en 2040. Lograr esto a corto plazo dejaría a Uruguay como primero en la lista con los beneficios que ello conlleva (Atracción de inversión extranjera, reducción de costos futuros, crecimiento e inclusión laboral, acceso a fondos de financiamiento internacional, acceso a capital y menor costo de financiamiento, eficiencia operativa y ahorro de costos, ventajas competitivas, entre otras).

Retirar las promociones fiscales en este momento equivale a frenar la inercia de un cambio estructural positivo. Mantener los incentivos tributarios por un período más prolongado no constituye un gasto ineficiente, sino una inversión con retorno directo en la balanza comercial, la calidad ambiental y la soberanía energética. Esos incentivos, acompañados de una estrategia nacional de captación de inversiones en el rubro, la expansión de la industria, la generación de empleos y el liderazgo regional, nos significarán muchos más ingresos que cobrar un poco más de impuestos y patentes.



Ricardo ACOSTA CALVO
Periodista

La soberbia también tiene memoria



Las declaraciones de María Julia Muñoz en el programa Todo un Tema, del streaming de El Observador, el pasado jueves 22 de octubre, dejaron bastante más que una polémica política. La exministra del Frente Amplio acusó al Partido Nacional de haber tenido «mucho robo para la corona» durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y vinculó directamente al astillero Cardama con el financiamiento de la Lista 40 y de Javier García. Incluso aseguró que el expresidente conocía la existencia de supuestas coimas en su administración.

No fueron comentarios al pasar. Fueron afirmaciones graves, realizadas públicamente y sin que en esa entrevista se presentaran pruebas que las respaldaran.

Cuando se le recordaron episodios judiciales que involucraron a jerarcas de los gobiernos frenteamplistas, Muñoz también hizo sus propias distinciones: reconoció responsabilidades en el caso de Juan Carlos Bengoa, pero defendió a otras figuras como Fernando Calloia y Fernando Lorenzo. Una vara que, al parecer, admite distintas medidas según quién esté del otro lado.

La respuesta de Javier García fue anunciar que recurriría a la Justicia, algo que finalmente concretó el 26 de octubre mediante una denuncia por presunta difamación e injurias. Después llegó la respuesta de Muñoz, esta vez a través de una carta pública. Allí se presentó como una «señora jubilada», ironizó sobre el planteo del senador y hasta deslizó referencias personales para restarle entidad al reclamo. Fernando Pereira, por su parte, se encargó de aclarar que aquellas declaraciones eran una opinión personal y no representaban la posición del Frente Amplio.

Conviene aclararlo desde el principio: este no es un artículo para defender a Javier García ni al Partido Nacional. No hace falta compartir sus ideas, su trayectoria o sus posiciones políticas para cuestionar las formas de quien decide enfrentarlo. La discusión está en otro lado.

La memoria también debería servir para recordar que nadie tiene un certificado de superioridad moral. Mucho menos cuando su propia trayectoria estuvo atravesada por episodios que generaron controversia y dolor. La soberbia no es una virtud, y la condición de haber ocupado cargos importantes tampoco concede patente de autoridad sobre los demás.

Muñoz fue ministra de Salud Pública, ministra de Educación y Cultura y ocupó otras responsabilidades de relevancia. No es una ciudadana ajena a la vida pública ni alguien que desconozca el peso de sus palabras. Precisamente por eso, sorprende que confunda la contundencia con la descalificación y la experiencia con una supuesta autoridad para juzgar a los demás.

La política necesita confrontación, diferencias y dirigentes capaces de defender sus ideas. Lo que no necesita es convertir el debate en un ejercicio de desprecio personal.

Porque se puede cuestionar, denunciar y hasta recurrir a la Justicia sin perder el respeto. Y también se puede tener una larga trayectoria política sin creerse dueño de la verdad.

Nadie está obligado a admirar a quien piensa diferente. Pero nadie debería sentirse con derecho a mirar a los demás desde arriba.

Brasil: Lula o Bolsonaro,
dos barcos que no quiero abordar

Daniel MANDURÉ
Convencional del PC.
Fue Edil por Montevideo



Ni Lula ni Bolsonaro. No me obliguen a elegir. No son santos de mi devoción.
Hay que permitirse estudiar lo que sucede en Brasil sin caer en la trampa de tener que elegir a uno.
Parece estar de moda eso de llevarte casi a los empujones a tener que subirte a uno de esos dos barcos. Antes de navegar con uno o con el otro prefiero quedarme en tierra. Vivimos entre las pasiones y la presión social que ahogan y obligan a elegir. Estás con uno o estás con el otro. Una simplificación peligrosa que nos resistimos a acompañar.



En un clima raro, extraño, por todo lo que lo rodea, ganó Lula. Eso es indiscutible. A pesar de Bolsonaro.
Por supuesto que no nos resulta indiferente lo que sucede en Brasil ni consideramos equivalentes ambas conductas. Pero ninguno de los dos representa nuestros valores políticos, ideológicos, institucionales ni filosóficos.
Bolsonaro y Lula son dos expresiones diferentes, pero los dos están alejados de mis valores republicanos, liberales, laicos y de tolerancia.
Loa brasileños no merecen tener que elegir al menos malo.
No somos los que creen que para cuestionar a la extrema derecha me debo subir al barco del populismo demagógico de la denominada izquierda. O que para denunciar los excesos irresponsables del populismo de la izquierda debo treparme al barco de la derecha radical.
Esa lógica de adhesiones incondicionales es precisamente una de las enfermedades de la política contemporánea.
Desde ese lugar creo necesario explicar porque no me subo a ninguno de esos barcos.
Uno transformando la política en un gran clan familiar donde el padre con su liderazgo personalista desde la cárcel nombra a su hijo como heredero de su candidatura a la presidencia. Mientras varios familiares, incluyendo a la esposa de Jair, electa senadora, en otros cargos electivos. Una gran empresa familiar en el poder. Con fuertes indicios de decisiones autoritarias y antidemocráticas.
Por el otro lado un liderazgo también con perfil personalista y populista. Con contradicciones profundas. Respetando la alternancia en el poder y la convivencia con las reglas democráticas en la interna de Brasil pero que no ha trasladado a su política exterior. Apoyando hasta último momento a varias dictaduras de la región. Con antecedentes de corrupción tanto en lo personal como de su entorno más cercano. Con una gestión económica con serios desafíos fiscales.

Bolsonaro: autoritarismo de una derecha radical

No es de demócratas ni de republicanos no reconocer una clara derrota electoral. Parece transformarse en una costumbre eso de ver fraudes cada vez que se pierde. El de no aceptar el triunfo del adversario. Un demócrata puede cuestionar decisiones, discutir datos y recurrir a mecanismos legales de los que dispone en caso de tener dudas. Lo que no puede hacer es erosionar deliberadamente la confianza en las instituciones porque el resultado no le es favorable. Jair Bolsonaro nunca asumió con responsabilidad democrática su derrota electoral en 2022. Hoy su hijo, sigue el mismo camino.
Jair no participó de la ceremonia de transmisión del mando, rompiendo con la tradición republicana. Luego fue condenado a 27 años de prisión por su participación golpista destinada a impedir la continuidad institucional. Hoy su hijo tampoco reconoce la derrota, huye del país, denuncia persecución y es acusado de lavado y peculado. A diferencia de los principales dirigentes de su partido que reconocieron el triunfo en las urnas de su adversario Lula.
Hay también otros integrantes de ese gran clan familiar investigados por la justicia por hechos de apariencia delictiva.
Jair como su hijo construyeron parte de su campaña y de su identidad publica alrededor de su concepción religiosa, influenciada por los sectores evangélicos conservadores, alejada de nuestra visión de república laica. Tratando de convertir con sus manifestaciones, a sus creencias religiosas personales como parte de la identidad política del propio Estado.
Quien pretende gobernar un país debe mostrarse a la altura con argumentos y no con descalificaciones de carácter personal. La mención de los 9 dedos que hizo en el debate Flavio Bolosnaro a Lula por un accidente laboral en su juventud y la perdida de unos de sus dedos fue de una bajeza imperdonable. Impropia para quien aspira a ser jefe de Estado.

Lula: populismo, contradicciones y el fantasma de la corrupción

Lula, es una figura de enorme trayectoria política. Más allá de las diferencias ideológicas que me separan de él, hay que reconocerlo. No es para cualquiera acceder a ser presidente por cuarta vez. Sindicalista y fundador del PT, Partido de los Trabajadores. Su historia política está unida a importantes conquistas sociales sobre todo en sus dos primeros gobiernos. Pero reconocer estos méritos no obliga a ignorar sus profundas contradicciones. Ni sus propias responsabilidades políticas de la grave situación fiscal y económica en la que se encuentra Brasil. Situación económica que llevará al país norteño a tener que realizar un ajuste fiscal importante debido a esa carga financiera. Su liderazgo personalista no le ha permitido a su partido lograr la necesaria renovación. A los cuestionamientos y a las comprobables acusaciones que terminaron procesándolo a él y a buena parte de sus colaboradores más cercanos. Ha sido evidente su vínculo y apoyo a gobiernos que terminaron restringiendo libertades, violando los derechos humanos y debilitando las

instituciones. Fundador del antidemocrático Foro de San Pablo que apoya las dictaduras de la región, afines ideológicamente. Para maquillar la deteriorada imagen del Foro de San Pablo crean el Grupo de Puebla. El mismo perro con diferente collar. Integrado por varios exmandatarios envueltos en casos de corrupción como Rafael Correa, Evo Morales, Alberto Fernández como del integrante del muy deteriorado Partido Socialista Español, Rodríguez Zapatero, hoy también vinculado a casos de corrupción.
Lula fue condenado y estuvo preso 580 días en el marco de la operación Lava Jato. Condenas que luego fueron anuladas, no por eximirlo de culpabilidad, porque las pruebas fueron contundentes, sino porque la Justicia de Curitiba carecía de competencia para juzgar esos casos, como así también por la parcialidad del entonces juez Moro. La anulación nunca fue una absolución sobre el fondo de las acusaciones. El menselao, la trama de Petrobras y Odebrecht involucraron a dirigentes, operadores y funcionarios del más alto nivel que rodeaban su entorno cercano. Difícil creer que un político «bicho» y con gran experiencia política como Lula desconociera lo que sucedía a su alrededor.
Las promesas de ampliar beneficios, prestaciones y programas sociales sin la certeza de contar con los recursos necesarios ha sido de una gran irresponsabilidad. Un criterio populista y demagógico que complicará su propia novel gestión.
Esa extraña decisión de sacarle el pasaporte a Bolsonaro al otro día de la elección deja legitimas dudas, una vez más, sobre la imparcialidad de la justicia en Brasil.
Dos ideologías enfrentadas con un mismo gran error. El abuso de poder por encima de la ley.
Por un lado nos encontramos con una derecha radical que exhibe tendencias autoritarias y hasta fascistoides, con una concepción religiosa de la identidad política, con acusaciones de corrupción, con escaso acatamiento a las decisiones democráticas de un pueblo.
Por el otro una izquierda populista con contradicciones profundas, con antecedentes de corrupción personal y de su entorno y una gestión económica con muy serios problemas.
Imposible ignorar o no recordar todos estos antecedentes, por eso veo hasta con cierta sorpresa como republicano, liberal y batllista quienes han inclinado, aunque en algunos casos con reparos, la balanza hacia un lado o hacia el otro.

La doble vara del frente amplio

Hace unos días escuchábamos al inefable presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira decir sobre la huida del país de Flavio Bolsonaro: «Solo se fuga alguien que tiene algo para esconder»
Sin embargo, unos meses antes recibió al expresidente Rafael Correa quien fue condenado en Ecuador a ocho años de prisión por el caso sobornos y huyó a Bélgica.
Habría que preguntarle a «Fernandito» si la Justicia es un principio universal que abarca a todos o depende de quién sea el acusado. No asombra, ha sido ese el hilo conductor del Frente Amplio. Las contradicciones, el cinismo y la doble vara.
No creemos en los lideres providenciales. Los que se autodefinen como los salvadores de la patria. No podemos avalar a nadie que por más votos que tenga estén por encima de las instituciones. Tampoco creemos en que la legitimidad electoral otorgue un cheque en blanco para gobernar sin límites.
El republicanismo no consiste solamente en votar. Consiste en que el poder tiene límites. Que los gobernantes deben rendir cuentas. Que la justicia debe actuar con independencia y que las minorías conservan sus derechos.
No estamos ni con Lula ni con Bolsonaro. Porque defendemos la libertad, la tolerancia, la separación de poderes, la independencia de la justicia, a pensar con libertad. Creemos en un Estado laico, donde se respete la libertad religiosa de los ciudadanos, pero donde ninguna doctrina religiosa se apropie del Estado.
Con estas convicciones no podemos encontrar razones para convertirnos en defensores de Bolsonaro ni justificadores de Lula.
Ese es el problema de nuestro tiempo. Se relativiza la corrupción de un lado y se ataca la del bando opositor. Se perdonan los atropellos institucionales por afinidad ideológica y somos implacables con las desviaciones del bando contrario.
Esa lógica equivocada de las tribus políticas: No importa lo que se hace sino quien lo hace.
Nosotros no nos subimos a esos barcos. Preferimos cuestionar con libertad los errores de todos, empezando por reconocer los nuestros. Como de señalar aciertos que favorezcan a la sociedad sin importar el bando que los tenga.
No queremos políticas de extremos ni de fanatismos. De aquellos que como Fernando Pereira y compañía que se espantan porque Bolsonaro huyó del Brasil pero que recibieron con alfombra roja al condenado por corrupción de Rafael Correa, que se rajó de Ecuador para no ir en cana.
Esperemos que baje la espuma y que el tiempo permita evaluar con serenidad todo lo sucedido en Brasil.
No todo es Lula o Bolsonaro. Hay cuestiones que están por encima de hombres y nombres. Por encima de caudillos y de conveniencias personales.
No subirse a ningún de los dos barcos no es no tener rumbo. Todo lo contrario. Es negarse a aceptar las presiones sociales. Es negarse a inclinar la balanza por el menos malo. Es negarse por sobre todas las cosas a navegar en una dirección contraria a nuestros principios. Porque eso, al final del camino, es lo único innegociable.



Marcelo GIOSCIA CIVITATE
Abogado. Periodista

Retiro jubilatorio a los sesenta años

Desde la aprobación de la reforma jubilatoria promovida por el gobierno anterior, consagrada en Ley 20.130, el partido del actual gobierno y su brazo sindical y organizaciones sociales afines, impulsaron una consulta popular para dejar sin efecto esa disposición legal.
Habiendo resultado negativa la iniciativa (ya que el Cuerpo Electoral ratificó la permanencia y vigencia de dicha reforma) inmediatamente, luego de alcanzado nuevamente el poder, han buscado por todos los medios instalar un debate (al que denominaron «diálogo social») tendiente a hacerle modificaciones a la legislación vigente en la materia.
El atento lector, así como la mayoría de los ciudadanos que ratificaron la norma, tendrán presente que de no haberse impulsado dicha reforma de la seguridad social, no se hubiera salvado el régimen previsional ni garantizado



el pago de las jubilaciones y pensiones a quienes habían generado el derecho a percibirlas.
En pocos días, el Parlamento habrá de comenzar el estudio y tratamiento del proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo, en el que, en consonancia con su brazo sindical, pretende introducir modificaciones a la normativa vigente.
Paradojalmente y casi a contracorriente de todo el derecho comparado en esta materia, en que se ha incrementado la edad de retiro de los trabajadores, se busca consagrar la posibilidad de una jubilación a los sesenta años, que fue el sonsonete repetido una y otra vez en las campañas previas al plebiscito donde la ciudadanía confirmó la ley vigente.
Tal vez esta iniciativa pueda ser útil a un pequeño grupo de trabajadores, pero huele más a una propuesta de tipo demagógico y hasta populista, que, a juicio de la oposición, no calibra el riesgo que conllevaría su aprobación.
Argumentan los que promueven esta modificación que se «generan derechos y la libertad», cuando, a decir verdad, aunque resulte dura: lo que se obtendrá es una pobre retribución que cargará más el sistema de prestaciones.
A nadie escapa la necesidad de incrementar el número de cotizantes a un organismo previsional que requiere de ingentes recursos del gobierno central para poder cumplir con sus obligaciones, como tampoco parece importarles el muy alto porcentaje de informalidad que se padece en nuestro país, en el que muchos trabajadores pretenden eludir sus obligaciones previsionales.
Y esta baja de edad que se promueve, por un retiro anticipado en aras de una pretendida «libertad», no tiene en cuenta esos aspectos, que no son menores, a mi leal entender.
Entiendo que quienes opten por esa modificación esgrimiendo «su derecho», así como su «libertad de elegir», pretendan asegurarse un ingreso que, aunque magro, les resulte seguro…y necesariamente habrán de completar su presupuesto, desarrollando actividades sin realizar aportes.
Hasta dónde podrá celebrarse entonces, la consagración de esa pretendida «libertad».
Cabe preguntarse cuál es la real motivación que encubre el apuro a modificar lo que fue ratificado por la voluntad del soberano en esta materia tan sensible.

La derechización tardía

Eduardo FAZZIO
Dr. En Medicina y Técnico Veterinario. Licenciado en Negocios Internacionales e Integración. Docente Universitario. Fue Edil por Montevideo



Se habla, aquí y en la región, de una nueva derecha que crece con discursos de orden, desconfianza hacia la política tradicional y una hostilidad hacia la izquierda que parecía cosa de otra época. Con perspectiva histórica, se parece más a un regreso: una reacción que el país ya conoció, que vuelve medio siglo después con otro vestuario y que, por llegar tarde, apunta contra un adversario que ya no existe como lo imagina. Es una reacción ideológicamente anacrónica y socialmente contemporánea: usa un lenguaje viejo para expresar malestares nuevos. Bajo ese nombre conviven partidos emergentes, votantes desencantados



y discursos endurecidos en partidos tradicionales; aquí interesa lo que tienen en común.

El péndulo de los setenta

En los sesenta y setenta, el Uruguay vivió el desafío de una izquierda en la que una parte había optado por la vía armada, mientras otra, desde 1971, disputaba el poder en las urnas con el Frente Amplio, en medio de una larga crisis económica y social. La respuesta fue de orden, y la dieron gobiernos de mi propio partido. El gobierno de Pacheco hizo de las Medidas Prontas de Seguridad una forma habitual de gobernar, y el de Bordaberry profundizó ese camino hasta la ruptura institucional de 1973.

Aquel péndulo dejó una enseñanza sobre lo que ocurre cuando una sociedad responde a sus frustraciones solo con orden, sin respuestas políticas a los problemas que las generan: el orden se vuelve un fin en sí mismo, la política se achica y el desenlace lo terminan escribiendo otros. Hoy se repiten ciertos rasgos, como la desconfianza hacia la deliberación o la presentación del adversario como enemigo; reclamar más seguridad, en cambio, es una demanda legítima que nada tiene de autoritaria.

Una reacción tardía

La derecha que emerge hoy repite varios de aquellos moldes: el orden como respuesta central, la sospecha hacia los matices y la demonización de la izquierda. Llega tarde, y contra un adversario distinto. La izquierda uruguaya de este siglo llegó al gobierno por las urnas, gobernó quince años con un perfil más socialdemócrata que revolucionario, lo entregó sin sobresaltos en 2020 y volvió en 2024. Se le pueden criticar muchas cosas, pero no es la izquierda de los setenta.

Esa nueva derecha culpa ante todo al Frente Amplio por sus quince años de gobierno, pero además les cobra a los gobiernos batllistas de fin de siglo haber visto crecer al Frente sin resolver problemas básicos, y lo mismo a la coalición de 2020-2025, que logró avances en algunos frentes pero no alcanzó a cambiar el fondo. Por eso tiene un rasgo antisistema que la distingue de la derecha tradicional: desconfía de todos los que gobernaron, incluidos los que hoy le piden el voto en nombre de la unidad opositora.

Lo que la alimenta

Detrás hay frustraciones reales.

La primera es la inseguridad, convertida en experiencia cotidiana de barrios enteros. La segunda es el narcotráfico, que le dio al delito otra escala y una capacidad de disputarle territorio al Estado que el país no conocía. La tercera son los nuevos emergentes sociales: miles de personas que quedaron por fuera del trabajo formal, de la educación y de cualquier forma de representación. La cuarta es el agotamiento de los modelos industriales que durante décadas dieron empleo masivo, sin que aparezca algo que los reemplace. A eso se suma algo menos visible: la pérdida de expectativas de progreso en sectores medios, trabajadores formales y jóvenes que cumplen las reglas y sienten que su esfuerzo ya no les garantiza mejorar.

Sobre ese malestar se monta un marco regional importado con más emoción que conocimiento, del Foro de San Pablo a Milei, que reduce la política a una dicotomía entre socialismo y libertad y presenta la derechización como única respuesta posible.

Ese marco tiene amplificadores locales. Intervenir en el debate sin pertenecer a un partido es legítimo; lo que se discute es una práctica. Exdirigentes de los partidos tradicionales que operan desde afuera, sin responsabilidad orgánica, y periodistas convertidos en militantes sin partido se presentan como de centro mientras tremendizan, atacan genéricamente a la izquierda o promueven candidatos a la medida de su prédica. Muchos lo hacen por convicción; en otra pesa también la búsqueda de una identidad y una vidriera. Pero más que las motivaciones, importa el efecto. Su tesis implícita es que los partidos ya cumplieron su ciclo y que las oposiciones se definen en la opinión pública. Tienen la influencia sin las cargas: agitan sin tener que gobernar después lo que agitaron, y enturbian un debate que los partidos, con todos sus defectos, todavía procesan con responsabilidad.

Por qué copiarla no alcanza

Lo planteo desde la oposición y pensando en que vuelva a gobernar. Parte de la oposición tradicional eligió el camino más corto: correrse hacia la derecha y adoptar su lenguaje para retener a ese votante. El cálculo tiene tres fallas.

La primera es que los partidos que se corren hacia ese votante persiguen a alguien que ya los ve como parte del problema, y en esa competencia la copia suele perder frente al original, que habla más fuerte y promete más simple. Es cierto que en 2024 el Partido Colorado creció con una oferta más volcada a la derecha, y ese mérito es de quienes la construyeron. Pero buena parte de ese crecimiento vino de la caída de Cabildo Abierto, y hacia 2029 ese mismo electorado estará disputado por ofertas que prometerán todavía más.

La segunda es que la dicotomía entre socialismo y libertad tiene un costo del otro lado. Buena parte de los uruguayos que votaron al Frente Amplio son votantes moderados, que eligieron por confianza en un candidato o por expectativas de gestión y que podrían elegir otra cosa si se les ofreciera, y presentarlos como enemigos de la libertad desconoce esa realidad. Así, la estrategia pensada para derrotar al Frente encierra a la oposición en un mismo espacio, mientras el centro sigue sin otra casa.

La tercera ocurre dentro de la propia oposición. Cuando el antifrenteamplismo se vuelve prueba de pertenencia, quien reconoce un acierto del gobierno o reclama acuerdos pasa a ser el «centro tibio», los moderados dejan de hablar y el espacio se queda sin las ideas y los liderazgos que necesitaría para crecer.

Llegar a tiempo

Si la reacción se alimenta de problemas reales, la manera de disputarle terreno es ocuparse de ellos antes que de su emoción. Eso exige una seguridad pensada desde la gestión, con policías mejor conducidas, inteligencia contra el lavado y una mirada realista del narcotráfico que recupere y pacifique los barrios, con firmeza y dentro de la ley. Exige una educación que destrabe el bloqueo que deja afuera a tantos jóvenes, políticas que integren a quienes quedaron en los márgenes y una estrategia productiva que genere empleo de calidad, con un Estado que conduzca y mida resultados en lugar de achicarse o crecer.

Eso es, en buena medida, lo que la tradición batllista supo hacer cuando estuvo a la altura de su tiempo: combinar libertad, reforma y justicia social sin pedirle a la sociedad que eligiera entre ellas. El oposicionismo necesita un adversario para existir; una oposición con identidad necesita un proyecto para merecer gobernar, y el país necesita que alguien recupere esa ambición.

A una reacción tardía se le responde llegando a tiempo, con las respuestas que la política le viene debiendo a la gente desde hace demasiados años.



Eduardo IRIGOYEN
Periodista

La lectura amenaza con convertirse en un privilegio

¿Cuándo fue la última vez que compraste un libro?
No me refiero a que descargaste un PDF, leíste un artículo en Facebook o buscaste una respuesta en Google.

Un libro

¿Y cuándo fue la última vez que lo leíste entero, sin mirar el celular cada cinco minutos? No es una pregunta para avergonzar a nadie. A mí también me pasa que puedo estar horas frente a una computadora, leer noticias, investigar, discutir y saltar de un asunto a otro. Pero no es lo mismo: leer un libro exige otra disposición. Hay que sentarse, concentrarse, seguir un razonamiento, recordar lo que leímos veinte páginas atrás y, sobre todo, tener un poco de paciencia. Una virtud que, dicho sea de paso, no parece cotizar demasiado en estos tiempos.

Detrás de la pérdida del hábito de lectura hay un problema bastante más importante que la desaparición de las librerías de barrio o la tristeza de ver una biblioteca familiar convertida en mueble decorativo. Estamos ante la posibilidad de que se profundice una nueva forma de desigualdad social: la desigualdad en las oportunidades de desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y complejo.



No estoy diciendo que quien lee libros sea más inteligente que quien no los lee. Ni que los niños de familias acomodadas tengan mejores cerebros que los de hogares humildes. Sería una estupidez. Hablo de las condiciones que permiten ejercitar capacidades que todos tenemos, pero que no todos podemos desarrollar en las mismas circunstancias.

Dos gurises, dos casas y dos maneras de empezar la carrera

Imaginemos dos familias, dos gurises uruguayos de la misma edad. Uno crece en una casa donde hay libros, conversaciones, adultos que le leen cuentos, bibliotecas cercanas y tiempo para estudiar. Sus padres pueden acompañarlo, limitar razonablemente las pantallas, pagar actividades culturales y ofrecerle un ambiente tranquilo. El otro vive en un hogar donde los adultos trabajan muchas horas, los recursos son escasos y el celular termina siendo, además de una ventana al mundo, una forma bastante económica de mantenerlo entretenido. No necesariamente porque sus padres no se preocupen por su educación, sino porque tienen otras urgencias y menos posibilidades de acompañarlo.

Ninguno eligió dónde nacer. Sin embargo, al cabo de unos cuantos años, podrían encontrarse en condiciones muy diferentes para comprender un texto, argumentar, investigar o distinguir una información confiable de una pavada viral.

¿Estamos construyendo, sin proponérnoslo, una sociedad en la que algunos tendrán cada vez más oportunidades de aprender a pensar, mientras otros dispondrán de cada vez más oportunidades de consumir contenidos? No es una profecía apocalíptica. Es una hipótesis que merece atención.

Algunos datos ayudan a ponerle números al asunto. Una encuesta sobre prácticas de lectura y compra de libros realizada en Uruguay por Jussi Nómade entre noviembre y diciembre de 2025, sobre 1.837 personas mayores de 18 años, encontró que el 47,6 % no había leído un solo libro durante ese año.

Pero hay un dato más revelador: entre quienes tenían menor nivel educativo, solo el 26,3 % había leído al menos un libro, mientras que entre quienes tenían formación alta la proporción llegaba al 84,4 %. La encuesta tiene una metodología de cuotas y ponderación, por lo que conviene tomarla como un indicador y no como un censo de hábitos nacionales. Aun así, la diferencia es demasiado grande para ignorarla.

No demuestra que la educación superior produzca automáticamente lectores, ni que la falta de lectura sea consecuencia exclusiva de la pobreza. Pero muestra que los hábitos culturales tampoco se distribuyen de manera igualitaria.

Mucho se habla de leer pero los números cuentan otra historia

Y si miramos a nuestros gurises, los resultados de las evaluaciones educativas son todavía más preocupantes. Según el Aristas 2023, del INEEd, el 19,7 % de los alumnos de sexto de primaria se encontraba en los dos niveles inferiores de desempeño en lectura. Pero la diferencia según el contexto socioeconómico de las escuelas era brutal: 5,7 % en los centros de contexto muy favorable y 34,9 % en los muy desfavorables. Es decir, seis veces más. En tercer año, la distancia también era considerable: 17,9 % frente a 61,1 %.

PISA 2022 aporta otro dato: apenas el 59 % de los estudiantes uruguayos de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia lectora, frente al 74 % del promedio de la OCDE. Y solamente un 2 % llegó a los niveles más altos, frente al 7 % de los países de la organización. Además, el 52 % declaró distraerse con dispositivos digitales en la mayoría o en todas las clases de matemática.

Aclaremos algo: estos resultados no prueban que los celulares sean responsables de las dificultades lectoras. Tampoco prueban que un gurí que mira videos sea incapaz de pensar. Sería tan absurdo como afirmar que quienes crecimos mirando televisión terminamos con el cerebro frito. El problema no es la pantalla en sí misma, sino qué hacemos con ella, cuánto tiempo ocupa y qué actividades desplaza.

El problema no es solamente el celular

Una clase virtual, una investigación científica o una conversación con alguien que vive al otro lado del mundo pueden ser experiencias extraordinarias. Una sucesión interminable de videos de quince segundos, no necesariamente.

La tecnología no es el enemigo, pero tampoco una varita mágica que convierte cualquier actividad en aprendizaje. Repartir computadoras, tablets o celulares no equivale a democratizar el conocimiento. Para eso hacen falta docentes, libros, bibliotecas, acompañamiento y, sobre todo, enseñar a utilizar la información en lugar de limitarse a consumirla.

Hay otra cuestión que me parece particularmente importante. Las familias con mayores recursos pueden ofrecer a sus hijos algo que no siempre se compra directamente: tiempo y condiciones para concentrarse. Pueden pagar clases particulares, actividades culturales, profesores de idiomas y una educación

complementaria. También pueden decidir que sus hijos no tengan un celular hasta determinada edad o que dediquen una parte del día a leer.
Las familias con menos recursos pueden tener exactamente las mismas preocupaciones y aspiraciones, pero no siempre disponen de las mismas posibilidades. Y sería bastante injusto responsabilizar a unos padres que trabajan diez o doce horas por no poder acompañar a sus hijos como quisieran.
Ahí es donde entra la educación pública. La escuela uruguaya nació, entre otras cosas, para compensar las desigualdades de origen. Esa tradición vareliana y batllista sigue teniendo plena vigencia. No alcanza con que todos los niños tengan formalmente un lugar en el aula: hay que procurar que todos tengan oportunidades reales de aprender.

Varela todavía tiene algo que decirnos

Necesitamos bibliotecas escolares vivas, libros disponibles, tiempo de lectura, docentes con formación y recursos, apoyo temprano a quienes presentan dificultades y una incorporación inteligente de las nuevas tecnologías. No se trata de prohibir los celulares por decreto ni de regresar nostálgicamente a la época de la pluma y el tintero. Se trata de recuperar algo bastante más elemental: la capacidad de prestar atención, comprender, preguntar y elaborar una idea propia.
Y ahora aparece la inteligencia artificial. Podemos pedirle que nos resuma un libro, explique una teoría económica o escriba un trabajo sobre Artigas. Maravilloso. Pero si no tenemos conocimientos previos ni capacidad para verificar lo que nos responde, podemos terminar aceptando cualquier disparate con una redacción impecable. ¡Hasta las boludeces vienen ahora muy bien presentadas!
La IA puede ser una herramienta extraordinaria de democratización del conocimiento. También puede ampliar las diferencias entre quienes saben utilizarla para investigar, contrastar y aprender, y quienes delegan en ella hasta el esfuerzo de pensar. Por eso, antes de enseñar a los gurises a utilizar inteligencia artificial, tenemos que enseñarles a leer, escribir, razonar y dudar.
Y hay una consecuencia que va más allá de la educación: tiene que ver con la democracia. Una sociedad necesita ciudadanos capaces de comprender lo que leen, contrastar una noticia, reconocer una manipulación y evaluar los argumentos de quienes pretenden gobernarlos. No necesitamos que todos sean universitarios, filósofos o lectores de Schopenhauer. Tampoco los libros inmunizan contra la estupidez: basta mirar la historia para encontrar intelectuales brillantes defendiendo las peores barbaridades. Pero una ciudadanía con dificultades para comprender textos complejos, distinguir hechos de opiniones y verificar información queda más expuesta a la propaganda, los discursos simplificadores y la manipulación emocional. Y eso debería preocuparnos bastante más que la cantidad de seguidores que tiene un influencer.

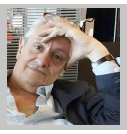
Saber cuándo nos están vendiendo humo

No sabemos si estamos ante el nacimiento de una nueva división de clases basada en las oportunidades de desarrollar el pensamiento. Sería prematuro afirmarlo. Pero sí tenemos indicadores que justifican la preocupación: desigualdades educativas persistentes, diferencias muy marcadas en los hábitos de lectura y dificultades para sostener la atención en determinados entornos digitales.
Quizá dentro de unos años los sectores más acomodados no solamente paguen mejores colegios, idiomas, viajes y actividades culturales. También procuren proteger a sus hijos de la sobreestimulación, les ofrezcan libros, conversación, silencio y tiempo para pensar. Mientras tanto, otros gurises podrían pasar buena parte de su infancia frente a dispositivos que les ofrecen entretenimiento infinito, pero no necesariamente herramientas para comprender el mundo.
Sería una paradoja bastante perversa. Después de décadas intentando democratizar el acceso a la educación y la cultura, podríamos terminar convirtiendo la lectura profunda y la autonomía intelectual en nuevos privilegios de clase. No quiero exagerar ni anunciar el fin de la civilización occidental porque un adolescente prefiera TikTok a Onetti, Borges, Felisberto o Cervantes. Pero tampoco me parece razonable mirar para otro lado.
Uruguay tiene una tradición de educación pública, laica y gratuita que debería servirnos como punto de partida. Hay que actualizarla, fortalecerla y adaptarla a un mundo que cambia a una velocidad enorme, sin confundir modernización con llenar las aulas de dispositivos ni inclusión con conectividad. Porque el verdadero desafío no es conseguir que todos tengan una pantalla, sino que todos tengan las herramientas intelectuales para comprender lo que aparece en ella, cuestionarlo y formarse un juicio propio.

Modernizar la educación no es llenarla de pantallas

Y vuelvo a la pregunta del comienzo: ¿cuándo fue la última vez que compraste y leíste un libro? No te pregunto si tenés Netflix, si seguís veinte canales de YouTube o si consultas ChatGPT a cada rato.
¡Yo lo hago! Te pregunto por un libro. Por esas páginas que no te interrumpen, no te mandan notificaciones, no te ofrecen un video siguiente ni te preguntan si todavía estás mirando.
Tal vez haya llegado el momento de recuperar ese viejo y revolucionario hábito de sentarse a leer. No para sentirnos más cultos que los demás. Mucho menos para mirar por encima del hombro a quien no puede hacerlo. Precisamente, por lo contrario: para que leer, comprender y pensar no terminen siendo privilegios de quienes pueden pagárselos.
Porque una democracia necesita ciudadanos libres. Y la libertad también consiste en poder pensar con cabeza propia.

Claudio RAMA
Ensayista, economista y profesor uruguayo, especializado en temas de gestión y políticas de educación superior de América Latina.



El caos como política

Para algunos colectivos, el desorden es un derecho y el orden es la opresión. Las manifestaciones en Europa son una nueva muestra de cómo la vieja división entre izquierdas y derechas está siendo devorada por una grieta mucho más profunda, visceral y psicológica. No se trata solo de economía o de gestión pública; se trata de cómo entendemos la realidad misma y a la vida en sociedad. Nuestro mundo se ha fracturado entre dos visiones irreconciliables: un mundo de Orden como objetivo social frente al mundo del Caos como reinvindicación. En esta grieta las redes sociales y las políticas encuentra en esta división su combustible más eficiente.
Para algunos colectivos, el desorden es un derecho y el orden es la opresión. Se unen quienes buscan romper las viejas reglas de funcionamiento social que ven como normas rígidas, jerarquías institucionales y tradiciones y no como redes de seguridad construidas pacientemente por generaciones. Para ellos son jaulas invisibles diseñadas para perpetuar el control de unos pocos sobre nuevas mayorías, estructuradas sobre múltiples minorías que son base de un basamento confusamente contradictorio. Ellos conciben el orden que les ha dado derechos como opresión, como una fuerza homogénea que aplasta su individualidad, su diversidad y la propia autenticidad humana que dicen proferir. Bajo esta lógica, el desorden no es anarquía destructiva, sino un derecho fundamental y la base de legitimidad de su resistencia y derecho a la protesta de forma radical. Romper las normas, y entre ellas obviamente como primera la propiedad individual, es por definición, el acto central de su emancipación. El caos se celebra como la única garantía real de que el poder establecido no ha logrado domesticar el espíritu humano. Junto con ello vienen los múltiples individualismos y en esos países especialmente las migraciones.
Al otro lado, se encuentra un mundo que observa el panorama anterior con absoluto pavor. Para este grupo, el orden es la construcción histórica que separa la civilización de la barbarie y el abismo. Ven las leyes, los límites geográficos, las instituciones, los derechos individuales y la seguridad como el único suelo firme sobre el cual es posible construir una vida digna, prosperar y tener paz. Para estos, el desorden no es libertad; es una amenaza existencial a la convivencia y la vida colectiva. El caos, sostienen, destruye el esfuerzo acumulado por generaciones, genera y amplia conflictos colectivos y disuelve los lazos de confianza que sostienen a toda comunidad. En este universo, la obediencia a la norma no es sumisión, sino una muestra de responsabilidad cívica y madurez moral. La libertad solo existe si hay un marco institucional fuerte que la proteja de los impulsos más oscuros del ser humano.
Pero, lejos de buscar un puente o un sano equilibrio entre la libertad del caos y la seguridad del orden, los nuevos actores políticos propenden a la ruptura de los puentes posibles como base de su propia existencia y de la construcción de sus espacios de poder radicalizados. El objetivo de estos nuevos liderazgos pacientemente construidos en las grietas sociales que la enorme transición socioeconómica está facilitando, no es competir por convencer al rival, sino de profundizar las trincheras que se han ido construyendo con la globalización, utilizando este corte global y existencial como una herramienta de movilización masiva. En este escenario la política es el incentivo a la polarización. La moderación o el derecho para respetar a los otros no vende ni convence. Es más rentable empaquetar y enfrentar al adversario como extremista de unos derechos individualesl El insulto es siempre más fácil que el pensamiento, aunque los defensores del orden no sean tiranos totalitarios y retrógrados que odian la libertad y las minorías. Y que a los defensores del desorden se los vea como salvajes que quieren ver el mundo arder para poder existir como minorías reclamando ser mayorías. La nueva política se conforma como la capitalización del miedo y el resentimiento en las puertas de las próximas elecciones que se acercan en toda Europa. El orden se alimenta del miedo al crimen, de la pérdida de identidad y de la inestabilidad económica, prometiendo mano dura a cambio como garantía de convivencia. Por su parte, la política de «el desorden» se nutre del resentimiento contra las élites, las burocracias asfixiantes y las utopías de promesas incumplidas y del «quiero ya», buscando romper las estructuras coloniales, patriarcales, meritocráticas o individualistas desde su raíz, y exigiendo a los demás unas reglas especiales de derechos.
Los algoritmos en las redes sociales aceleran este proceso. Al premiar la indignación, obligan a los ciudadanos a elegir un bando: o estás con el progreso disruptivo (caos) o estás con la ley y la tradición (orden). Nada nuevo en la historia. Es el inicio del gobierno de los radicalismos extremistas que es donde estamos ya instalados desde hace rato.



Zósimo NOGUEIRA
Comisario General (r)

«A rajar, dijo Flavio Bolsonaro y se voló»



Un gobierno manipulador que maneja los recursos públicos como propios y se apoya en una justicia militante.
Como seres omnipotentes; no ocultan el autoritarismo para perpetuarse en el poder. Da miedo.
Poder que permite abusos y también medidas de auto protección.
El presidente Luis Ignacio Lula, en lugar de perpetuar su nombre como demócrata y republicano alimenta rencores y odios.
Poco queda de aquel operario metalúrgico que un día fue.
Hace unos cuarenta años lo oí discursar en un estrado en la plaza Internacional de Rivera-Livramento, ya agitador y ya con el apoyo de los recién liberados guerrilleros tupamaros.
Luego vino a Montevideo y estos mismos lo custodiaron. El lazo de unión es muy antiguo. Durante el gobierno de Lacalle Herrera hubo jornadas del Foro de San Pablo en el Palacio Peñarol.
Ahí se reunieron representantes de todos los movimientos guerrilleros de Sud-América y Centro América que luego de derrotados siguieron con su prédica en el ámbito político de sus países.
Algunos aún tenían a parte de sus filas en la clandestinidad.
Parece ser que está en sus ADN, la lucha del poder «por el poder mismo» Cuando lo alcanzan buscan la perpetuidad y las derrotas las sufren más que nadie.
Quién oyó los debates Lula – Bolsonaro habrá notado que hubo amenazas de prisión. No son bravuconadas, lo dicen y lo hacen.
El expresidente Elías Bolsonaro tiene dictada prisión para más allá de su muerte. No la andan con chiquitas y son los mismos actores.
Alexandre de Moraes hoy integrante del Supremo Tribunal Federal encabezo en forma directa la investigación contra Jair Bolsonaro por organizar e instigar intento de Golpe de Estado.
La sentencia de la CSF fue dictada por mayoría. Cuatro por la condena Carmen Lucia, Flavio Dino, cristiano Zanin y el propio Alexandre de Moraes, por la absolución estuvo Luis Fux.
La causa. Liderazgo de una organización armada. Tentativa de golpe de Estado. Abolición violenta del Estado democrático. Daño calificado y Deterioro de Muebles.
Fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión. Es evidente que la máquina represiva funcionó. Una forma radical de eliminar oposición.
No estoy para posicionarme por ningún bando, pero cualquiera sabe que en Brasil no hay golpe de Estado sin apoyo y revuelta militar. Por sus antecedentes y por su extensión geográfica.
Jair Bolsonaro fue Militar, su vicepresidente fue un General. Bien lo saben.
Los contendientes del actual anclaje político Flavio y Luis Ignacio basaron sus campañas en la descalificación, asignando al oponente actos de corrupción.
Lula estuvo preso por el caso Lava-jato, muy detallado en la serie de Netflix; múltiples implicados en coimas y corrupción al más alto nivel.
También en un tema a mi juicio menor por la compra de un apartamento.
El mismo Juez del TSF Alexandre de Moraes investiga y acusa a Flavio Bolsonaro por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento irregular de una película sobre su padre.
Otra muestra de cómo socavar o eliminar la oposición política con medidas radicales, es la presente realidad brasileña.
Allá por EE. UU. está instalado otro hijo de Jair Bolsonaro por manifestarse en contra de la prisión de éste. Tiene orden de aprehensión. Un primer fugado.
Volvamos al pasado reciente. En las elecciones de primera vuelta del 4 de octubre contra todos los pronósticos hubo victoria de Bolsonaro con una diferencia de 2.224.965.
En el ballotage Lula fue declarado ganador con una diferencia de 4.430.191. Como se explica esto.
¿Hubo fraude? No lo sabemos; puede que sí, puede que no. Pero si hubo trampas. Vivezas inmorales.
Se hicieron cosas indebidas con libre disposición de los recursos públicos en periodo electoral, cosas que en nuestro país son prohibidas por nuestra Constitución, esa que siempre quieren recortar o modificar.
Luego del 4 de octubre, Lula y el PT implementaron el «plan Platita». Perdón para pequeños deudores, sube y adelanta planes sociales, ayudas directas a comercios, subsidios para combustible.
Dicta normas para la producción nacional de videos juegos que tiene un público consumidor de 115 millones, prohíbe apuestas deportivas y reivindica la jornada laboral de 40 horas semanales con dos días de descanso.
Dice que para que los creyentes tengan más tiempo libre y puedan concurrir a las iglesias.
Medidas que afectaran a la economía, demagogia in extremis.
El golpe de gracia, el cierre de campaña, seguramente muy planeado y estudiado.
Durante la jornada electoral Lula personalmente reclamo por supuesta falta de transporte público gratuito que afectaba sectores de San Pablo y de Bahía en donde tiene un gran caudal de votantes.
En San Pablo ordenaron la detención del secretario municipal de movilidad Pablo de Souza, pero estaba fuera del país en misión oficial.
También querían la detención de Bruno Reis alcalde de Salvador y Celso Caldeira responsabilizándolos por falta de transporte público y gratuito.
El partido Liberal de Bolsonaro que es presidido por Valdemar Costa Neto recibía noticias de inclemencia climáticas en varias regiones del país.
Cuando se aproximaba el final del horario de votación Lula pidió extensión del periodo de votación para distritos de San Paulo y Bahía afectados por falta de transporte.
El destinatario. Cristiano Zanin el abogado que lo libero y ahora es parte del Supremo Tribunal Federal.
El Partido Liberal también lo pidió al Tribunal Superior Electoral por los problemas de inclemencia del tiempo en San Pablo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.
Cristiano Zanin fuera de su competencia en momentos de cierre de urnas dispuso que se extendiera el horario de votación por dos horas en todo Brasil.
Esto fue convalidado por el TSE, pero solo pudo realizarse en los circuitos que no habían cerrado y tenían gente para votar.
Parece orquestado, en esos circuitos la votación fue masiva a favor de Lula
Fue un aguante y despliegue de militancia y tropeada de votantes nunca visto.
Tampoco sabemos de controles y manipulaciones electrónicas. Mucha sombra, mucho gris. El voto es electrónico.
Dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral Kassio Nunes que no existe ninguna regla que permita extender la votación dos horas como lo hizo el ahora miembro del TSF Cristiano Zanin. Que no tiene competencia.
El Supremo Tribunal Electoral se expresó diciendo que ninguna urna ya cerrada puede ser abierta y solo pudo prolongarse el horario de votación donde había personas en fila para votar.
La última, y del mismo grupo de poder, como acallar y eliminar la oposición. Un adelanto de cómo gobernar sin mayoría parlamentaria, con el apoyo de la Justicia militante. Infundiendo miedo.
Cierre de fronteras y quita de movilidad por retiro y/o anulación de documentos al opositor Flavio Bolsonaro que tuvo 60 millones de votantes.
Su padre preso, su hermano con pedido de captura y el seguramente sería humillado y preso o muerto. Sin seguridad, mejor emigrar. No hay garantías.
Fue muy exitosa la mañosa planificación del PT.
Estemos alerta, es contagioso
Hay mucha concentración de poder en el Ejecutivo, ahora quieren sumar a los defensores de Oficio. Cuidado. Priman afinidades ideológicas.
El Golpe de Estado moderno. Entronizados con presidencias reelegibles u otras denominaciones. Simulacros republicanos como en la Venezuela de Chávez y Maduro, lo de Cuba, Nicaragua o como se perfila el Salvador de Bukele.
Las reelecciones son problemáticas, moldean prototipos omnipotentes. Se retrocede en libertad, en autonomía. Es vital conservar la independencia de los tres poderes.

La libertad en la hoguera

Guzmán A. IFRAN
Contador Público. Fue diputado
por Montevideo y Coordinador de la Opp



Me resulta imposible conciliar la defensa de la libertad con la imagen de una hoguera reservada a quienes incomodan al poder. Lo ocurrido con Javier Milei merece una condena inequívoca. No porque un presidente deba aceptar en silencio cualquier acusación, sino porque su responsabilidad democrática exige responder con argumentos, pruebas y templanza. Cuando quien gobierna transforma el disenso en una afrenta personal y a sus críticos en enemigos que merecen escarmiento, deteriora las condiciones que permiten a una sociedad discutir libremente su propio destino.



El viernes 23 de octubre, durante la Gala Anual 2026 de la Fundación Faro, en Buenos Aires, Milei agravió a periodistas que habían investigado el caso $LIBRA. La transcripción publicada por la propia Casa Rosada permite verificar la secuencia. Nombró a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes acusó de corrupción y de fabricar operaciones. Más adelante, después de una referencia a combatir el mal, afirmó que «los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta». Es importante ser exactos. La frase no contiene la palabra periodistas, pero fue pronunciada en el mismo tramo de un discurso que acababa de señalarlos y descalificarlos.

Según informó el diario La Nación, el 27 de octubre el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que se trataba de una metáfora y pidió que esas palabras no fueran interpretadas literalmente. Esa explicación no resuelve el problema. No hace falta suponer que exista un proyecto material de encender hogueras para advertir la gravedad de que un presidente recurra a esa imagen. Las metáforas también transmiten una concepción del adversario y del ejercicio del poder. Elegir el fuego como destino simbólico de quienes cuestionan al gobernante contribuye a presentar la discrepancia como algo que debe castigarse.

La hoguera tiene, además, una memoria histórica imposible de ignorar. Remite a la persecución de la herejía y a la Santa Inquisición, a tribunales de la Iglesia Católica que condenaban doctrinas y entregaban a los condenados al poder secular para su ejecución. Giordano Bruno fue quemado vivo en Roma el 17 de febrero de 1600, después de un proceso de la Inquisición romana. Como explica la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, su condena involucró posiciones filosóficas y teológicas, y no puede reducirse a la imagen simplificada de un científico castigado por un descubrimiento. Esa precisión no atenúa la barbarie de haberlo matado por sostener ideas consideradas heréticas.

También pienso en Jan Hus, reformador religioso condenado por herejía en el Concilio de Constanza y quemado en 1415. Su proceso fue distinto del de Bruno, pero ambos nombres recuerdan hasta dónde puede llegar una autoridad que convierte su doctrina en una verdad obligatoria y la discrepancia en un delito. No necesito atribuirles a aquellos hombres las categorías políticas de nuestro tiempo ni suponer que cada polémica fue apacible para defender una convicción elemental. Ni el desacuerdo más profundo con una creencia ni la crítica más incisiva a una institución justifican la persecución, mucho menos la muerte.

La investigación científica, la creación artística y el libre examen de las ideas necesitan que ninguna autoridad pueda clausurar una pregunta invocando una verdad inapelable. Una comunidad religiosa tiene pleno derecho a profesar sus dogmas, transmitirlos y defenderlos. Ese derecho no la autoriza a imponérselos a quienes no los comparten. La lógica sectaria aparece cuando la convicción propia pretende convertirse en obediencia ajena. Las ideas pueden discutirse con fundamentos, incluso cuando para otros son sagradas. Y la libertad de pensamiento protege también a quien cuestiona respetuosamente aquello que una mayoría considera indiscutible.

La responsabilidad histórica de aquellas autoridades eclesiásticas no se borra con el paso del tiempo. Persiguieron ideas y condenaron a quienes se apartaban de sus dogmas. Recuperar la hoguera como recurso retórico evoca precisamente ese castigo de la conciencia disidente. Invocarla para agraviar a críticos resulta especialmente grave en boca de quien dice librar una batalla por la libertad.

Tampoco estamos ante un episodio sin antecedentes. En enero de este año, el Comité para la Protección de los Periodistas publicó un informe sobre el deterioro del vínculo entre el gobierno argentino y la prensa. Allí recogió un estudio de FOPEA sobre la reiteración de expresiones deshumanizantes y recordó la consigna presidencial «No odiamos lo suficiente a los periodistas». Lo preocupante es la persistencia de una conducta que convierte el agravio en una forma de relación con el periodismo. Una democracia no debería acostumbrarse a que el odio sea presentado como una virtud política.

Creo que la templanza constituye una obligación de quien ejerce autoridad. Procesar internamente el desacuerdo, tolerar una pregunta incómoda y distinguir entre una crítica y una conspiración son capacidades indispensables para gobernar. Quien dispone de la palabra presidencial posee una influencia incomparablemente mayor que la de un ciudadano que se indigna frente a una pantalla. Por tanto, también carga con una responsabilidad mayor. El enojo puede explicar una reacción, pero no alcanza para justificarla ni libera a nadie de hacerse cargo de sus consecuencias. Se llama a los medios el cuarto poder por su capacidad de interpelar a las instituciones y someter sus decisiones al escrutinio público. Esa expresión cobra sentido cuando recordamos que el periodismo no se limita a difundir una agenda previamente elaborada. También la construye al investigar aquello que alguien preferiría mantener oculto. Una contratación irregular, un conflicto de intereses o una gestión negligente de recursos públicos pueden permanecer invisibles hasta que un periodista pregunta, contrasta documentos y publica. Sin esa tarea, los ciudadanos tendrían menos elementos para saber qué se hace con el dinero que aportan.

La utilidad de ese trabajo alcanza incluso a los gobiernos investigados. Una denuncia fundada puede permitirles apartar a un jerarca deshonesto, corregir una contratación o detener un despilfarro. Aunque inicialmente lo vivan como una cruzada en su contra, el periodismo puede ayudarlos a depurar su propia administración. Eso exige comprender que el interés público está por encima de la comodidad del gobernante. Silenciar al que descubre una irregularidad protege a quien la cometió y perjudica al contribuyente que termina pagando sus costos.

Defender esta función no supone declarar infalible a la prensa. Los periodistas se equivocan, tienen perspectivas e intereses y deben responder por su trabajo. Precisamente por eso corresponde exigir rigor, rectificaciones y transparencia. Un presidente puede refutar una investigación y reclamar las responsabilidades que correspondan por las vías institucionales. Pero una decisión judicial favorable no convierte automáticamente cada pregunta previa en una operación desestabilizadora. La responsabilidad política y la calidad de una gestión tampoco se agotan en determinar si existió un delito.

Quizá para muchos uruguayos esa imagen resulte particularmente chocante por el arraigo de nuestra tradición laica. No porque las creencias religiosas sean ajenas a nuestra sociedad, sino porque hace más de un siglo resolvimos que ninguna debía tener carácter oficial. La separación de la Iglesia y el Estado quedó consagrada en la reforma constitucional plebiscitada en 1917, que entró en vigor en 1919, culminando un proceso de secularización desarrollado durante décadas. El artículo 5 de nuestra Constitución establece que todos los cultos son libres y que el Estado no sostiene religión alguna. Me enorgullece esa conquista, que protege por igual al creyente y a quien elige no creer.

Existe allí una diferencia con Argentina, cuyo artículo 2 constitucional dispone que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Sería inexacto deducir de ello que el Estado argentino pertenece a la Iglesia o que sus ciudadanos están sujetos a sus dogmas. La misma Constitución garantiza la libertad de culto y la publicación de ideas sin censura previa. Mucho menos corresponde establecer una relación causal entre aquella disposición y los agravios de Milei. El contraste permite, sí, valorar nuestra temprana separación institucional y recordar que ninguna tradición religiosa ni identidad política puede estar por encima de la libertad de conciencia.

Desde Uruguay tenemos motivos históricos para mirar esta discusión con particular sensibilidad. En tiempos de Juan Manuel de Rosas, Montevideo acogió a escritores y publicistas argentinos que encontraron aquí un espacio para desarrollar su oposición. El Iniciador, fundado en 1838 por Andrés Lamas y Miguel Cané, reunió colaboraciones de intelectuales exiliados. La Biblioteca del Congreso argentino documenta que Juan Bautista Alberdi publicó allí, el 1.º de enero de 1839, el texto de principios que luego integraría el Dogma socialista de Esteban Echeverría. Esa actividad se desarrolló en la época de Rivera, cuya segunda presidencia transcurrió entre 1839 y 1843.

El antecedente continuó con Florencio Varela, exiliado en Montevideo y fundador de El Comercio del Plata en 1845, desde cuyas páginas combatió al rosismo. No corresponde idealizar aquellos años de guerras civiles ni atribuirles las garantías de una democracia contemporánea. Tampoco equiparar regímenes y métodos separados por casi dos siglos. Sí corresponde reconocer que esta orilla ofreció a voces argentinas un lugar desde donde escribir y discutir el poder que enfrentaban. Ese legado merece nuestro orgullo y, sobre todo, nuestro compromiso de preservarlo frente a cualquier gobierno, incluido el propio.

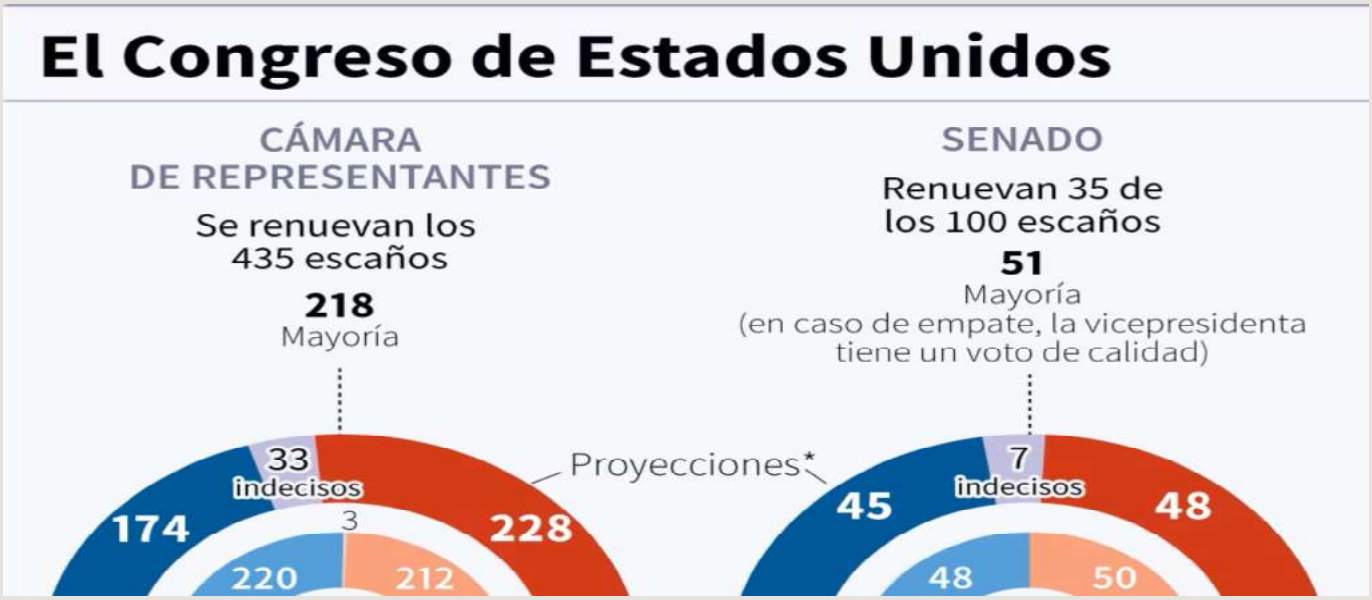
Por eso me preocupa profundamente que, en la Argentina de hoy, un presidente que invoca la libertad convierta a periodistas críticos en destinatarios de su hostilidad. La libertad de expresión del pensamiento se prueba cuando otro dice aquello que preferiríamos no escuchar. Defenderla exige aceptar que las ideas propias serán cuestionadas y que ninguna investidura concede el derecho a intimidar a quien pregunta. Quiero un Uruguay fiel a esa convicción y una Argentina donde el periodismo pueda incomodar sin ser señalado para el escarmiento. La palabra presidencial debería contribuir a hacer posible esa convivencia. Cada vez que elige una hoguera, por metafórica que sea, la vuelve más difícil.



Lorenzo AGUIRRE
Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Músico. Director de Orquesta

«Medio término»; redefiniendo relaciones internacionales

Mañana, Estados Unidos celebrará «Elecciones de Medio Término» («Mitad de Mandato»), en la cual se disputarán 435 escaños (218 para mayoría) de la Cámara de Representantes, y 35 en 100, del Senado, a efectos de conformar un nuevo Congreso. Asimismo, estarán en juego 39 asientos para gobernadores de Estados y fiscalías. En los presentes comicios - habilitando el período legislativo 3 de enero 2027, 3 de enero 2029 - la votación anticipada de 48 millones de electores (incluyendo al papa León XIV, siendo el primer pontífice en una consulta popular de un país laico) está pautando - según despachos de sondeos – 47% para demócratas, y 35% a republicanos. En cierta forma, las elecciones dan oportunidad a reequilibrar el poder, transformándose en termómetro en cuanto a gestión presidencial, y si los escaños son contrarios a Donald Trump, mutilarán la implementación de su programa político para la segunda fase de gobierno.
Las elecciones de «Medio Término» llegan en plena crisis interna en cuanto a precios en la gasolina, servicios de atención médica, aumento de impuestos a través de aranceles, e inflación disparada. A modo de telón, evidente corrupción, tráfico de influencias, erosión democrática, política exterior con marcado alejamiento de Estados Unidos en relación a los aliados, coqueteo con Rusia, expansionismo abusivo, y un acentuado separatismo con el Vaticano, que, en cierta manera, provoca urticaria en gran parte de la sociedad estadounidense, la cual ha llevado a confrontaciones difíciles de detener.
Es oportuno señalar que, Trump, está usando millones de dólares de contribuyentes para financiar campañas del «Partido Republicano», y su Administración ha desmantelado la seguridad electoral al despedir personal en la «Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad» – forma parte del «Departamento de Seguridad Nacional», responsable de protección en cuanto a infraestructura de la tecnología -, especializada en elecciones, así como retiro de apoyo económico a programas de capacitación sobre «Infraestructura Electoral», en el «Centro de Análisis e Intercambio de Información», más allá de manifestaciones, y amenazas, incluyendo la «sugerencia» de suspender dichos comicios.
Hoy, los hispanos, factor importante para la victoria de Donald Trump en las presidenciales de 2024, desaprueban su conducta, no solo por la actual situación de inestabilidad económica que los hace vivir, sino por el desprecio respecto a inmigrantes, hecho que los lleva a mirar hacia los demócratas.
Lo narrado, deja en evidencia que, el crecimiento de adherentes al «Partido Demócrata», se debe exclusivamente al desplome del «Partido Republicano» y resquebrajamiento de la corriente Trump.
En cuanto a política exterior, el mandatario ha reflejado un comportamiento matón y una oratoria tóxica, ordinaria, hacia el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, al expresar que debía hacerse a un lado de sus funciones, y renunciar a la solicitud de ingreso a la «Organización del Tratado de Atlántico Norte».
Asimismo, el presidente estadounidense, con su ambición expansionista, también puso mala cara frente a la soberanía de Dinamarca con respecto a la desolada y hasta ayer «olvidada» Groenlandia, y no olvidemos las relaciones muy tensionadas por la retórica de Trump, sobre un futuro «Estado 51» – Canadá -, además de demostrar falta de ética, postura autárquica y vulgaridad, frente al Primer Ministro Mark Carney, al expresar que, el ex Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, sería el gobernante y líder, del «Nuevo Estado».
Desde su asunción, Donald Trump ha presentado un accionar internacional complicando la convivencia entre varios países, y sin lugar a dudas se puso en posición contraria a media humanidad, enlodando el camino, moviéndose con intermitencia y «poca claridad» entre el mundo liberal, de forma grosera con Europa, como también con México, y de manera despectiva con los latinoamericanos que «se encuentran por todos lados».
Parece que se están produciendo abismos entre el primer mundo y el resto – el segundo mundo, que fuera una concepción pro Unión Soviética, ha desaparecido –, en el cual nos encontramos los «subdesarrollados del tercer mundo» (reflexión un poco dura que, para suavizarla y edulcorarla, pasaron a denominarla «en vías de desarrollo», y finalmente para colocar la «frutilla a la torta», nos llaman «emergentes»), un conjunto de comunidades tristes, desamparadas, mutiladas, vejadas y explotadas por pestosos racistas y nostálgicos reaccionarios.
Más allá de lo expresado, por otro lado, Donald Trump ha estimulado un coqueteo con el ex agente «007 y medio» de la «KGB», «Bond» Putin – quien está llevando también una campaña a favor del demagogo imperialista económico y xenófobo norteamericano -, respecto a acuerdos hacia una alianza entre Washington y Moscú, la cual incluye una interrelación de empresas rusas e inversores estadounidenses en cuanto a yacimientos petrolíferos y refinerías, accionar que Trump retribuiría a través de flexibilizaciones y levantamiento unilateral de sanciones por parte de Estados Unidos, contra Rusia.
Lo expresado trae cambios vertiginosos en observaciones y lineamientos a expedientes de «Asuntos Internacionales», los cuales se van de lado y desorientan porque las «modalidades de juego» en busca de intereses, son obsoletas, culminaron, y la concepción «derecha – izquierda», «medio mundo capitalista, medio comunista», pasa a ser cosa de otros tiempos.
Ahora, se trata de grupos dentro de cada país, en cada continente, porque, Trump, Putin, Macron, Marine Le Pen, Sánchez, y los otros, a esta altura ni ellos mismo creen sus charlatanerías de «verdades absolutas», aunque la «última verdad», tampoco es absoluta.
Pero, bueno, el aire se desnivela entre iniciativas y campañas políticas poco éticas, extravagancias de locos no amarrados, devaluaciones de conceptos y miserias de vida, en un mundo desilusionado buscando salida a una interminable crisis de una sociedad insatisfecha intentando con cierta forma de misticismo más o menos bastardeado, una vía de escape al sufrimiento de problemas.
Don Vladímir seguirá siendo por el resto de su vida, el agente con «licencia para matar», Donald, un irrespetuoso intolerante colonialista … ¡a fin de cuentas, no debemos aceptar los consejos de algunos mayores, porque, los idiotas a tiempo completo, e inmorales, también envejecen!



¿Qué ve Japón en América Latina?

Fitzgerald CANTERO PIALI
Experto en Geopolítica



El acercamiento japonés invita a mirar nuestra región desde otra perspectiva: como un socio para la seguridad económica internacional. El desafío es convertir ese interés en oportunidades que respondan también a nuestras prioridades.

La forma en que un país observa a otro dice mucho sobre sus propias preocupaciones. Qué compra, dónde invierte, qué rutas necesita y qué acuerdos promueve permiten reconstruir su lectura del mundo.

Por eso merece atención el acercamiento de Japón a América Latina y el Caribe. En una conversación regional frecuentemente concentrada en Estados Unidos y China, la perspectiva japonesa ayuda a ampliar el mapa y a formular una pregunta: ¿qué valor estratégico encuentran otros en nuestra región y cómo pensamos aprovecharlo?





En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, realizó una gira por México, Panamá, Ecuador y Trinidad y Tobago. El balance oficial del viaje ubicó en primer plano la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la cooperación en petróleo y minerales críticos. También vinculó el diálogo con las tensiones en Medio Oriente y el Indo-Pacífico.

Esa combinación resulta reveladora. Comercio, energía, infraestructura y política exterior forman parte de una misma conversación.

Una geografía que se mira desde las vulnerabilidades

Para comprender el interés japonés conviene cambiar el punto de observación. Desde América Latina solemos describir nuestras posibilidades a partir de lo que tenemos. Desde una economía industrial que necesita asegurar suministros, la pregunta es diferente: qué puede interrumpirse, dónde se concentran los riesgos y con quién es posible construir relaciones duraderas.

Un proveedor competitivo adquiere mayor valor cuando también ofrece previsibilidad. Una ruta comercial importa por su capacidad, pero también por la posibilidad de utilizarla de manera segura. Un acuerdo económico puede contribuir a reducir la exposición a decisiones o conflictos que se originan en otras partes del mundo.

En ese contexto, la distancia geográfica no elimina la relevancia estratégica.

El paso de Motegi por Panamá permite verlo con claridad. La seguridad y la libertad de navegación, así como el fortalecimiento de infraestructura crítica, incluido el canal, integraron las conversaciones. Un corredor latinoamericano aparece así dentro de una preocupación japonesa más amplia por la continuidad de los intercambios internacionales.

Nuestra región participa de la seguridad económica de países lejanos a través de sus recursos, sus mercados y sus conexiones.

Una estrategia que también moviliza financiamiento

El acercamiento tiene una dimensión financiera concreta. El 24 de agosto, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo acordaron ampliar de 4.000 a 5.000 millones de dólares la meta de aprobaciones de cofinanciamiento del programa CORE y extender su cooperación hasta 2031.

Agricultura y minerales críticos se incorporaron como nuevas prioridades del cofinanciamiento soberano. Se trata de una meta de financiamiento, no de recursos ya desembolsados. Pero la orientación importa: vincula instrumentos de desarrollo con seguridad alimentaria, seguridad económica y cadenas de suministro más resilientes.

Existe, además, una continuidad que precede a esta gira. La iniciativa diplomática japonesa hacia América Latina y el Caribe de 2024 ya reconocía a la región como un actor indispensable para la seguridad económica mundial.

La visita expresa, por tanto, una lectura que viene tomando forma mediante diplomacia, cooperación y herramientas financieras.

¿Qué queremos obtener de ese interés?

Para América Latina, la cuestión decisiva es cómo responder.

Tener recursos que otros necesitan puede mejorar nuestra posición negociadora. El resultado dependerá de qué acuerdos construyamos y de las capacidades que logremos desarrollar a partir de ellos.

Una relación centrada en abastecer materias primas puede generar exportaciones y empleo. También conviene preguntarse qué oportunidades existen para incorporar procesamiento, servicios especializados, proveedores locales, formación técnica e investigación conjunta.

Esos resultados requieren proyectos viables y negociaciones concretas. No todos los países pueden ofrecer lo mismo ni todos los eslabones de una cadena productiva resultan competitivos en cualquier lugar. Precisamente por eso hace falta identificar dónde existen posibilidades reales.

La cooperación con Japón podría evaluarse con preguntas bastante prácticas: ¿qué inversión permitiría ampliar una capacidad productiva? ¿Qué tecnología ayudaría a resolver un problema? ¿Qué empresas podrían integrarse como proveedoras? ¿Qué conocimientos deberían quedar instalados en el país?

La calidad de una relación internacional también se mide por las posibilidades que abre después de la firma.

Una agenda propia en un mundo de varios socios

El interés japonés permite, además, ampliar una discusión que con frecuencia se presenta como una elección entre Washington y Beijing. América Latina necesita construir vínculos diversos, evaluando en cada caso beneficios, compromisos y riesgos.

Japón tiene intereses propios. Comprenderlos es parte del trabajo necesario para encontrar coincidencias y negociar diferencias. Una relación madura exige que ambas partes sepan qué buscan.

Para Uruguay, esa conversación merece una agenda específica. Alimentos, logística, servicios, energía y conocimiento ofrecen campos para examinar complementariedades. El punto de partida debería ser una cartera de iniciativas respaldada por capacidades empresariales, técnicas e institucionales.

A escala regional también existen oportunidades para coordinar proyectos, compartir información y dar mayor dimensión a propuestas que, por separado, pueden resultar insuficientes. La diversidad latinoamericana exige distintos instrumentos, pero permite encontrar intereses comunes.

Japón está mirando hacia América Latina con preguntas sobre su futuro: cómo asegurar suministros, fortalecer relaciones y reducir vulnerabilidades.

Nos corresponde mirar esa relación con preguntas sobre el nuestro.

¿Qué capacidades queremos desarrollar? ¿Qué lugar buscamos ocupar en las cadenas de valor? ¿Qué dependencias necesitamos reducir? ¿Qué estamos dispuestos a construir junto con otros?

Japón tiene una estrategia hacia nuestra región. La pregunta es si estamos convirtiendo ese interés en una estrategia propia.



Gustavo GÓMEZ RIAL
Abogado. Escritor

Sin inteligencia artificial

Sin inteligencia artificial, ni a la vista cualquiera otra que pueda considerarse natural. Sin rumbo, sin proyectos, sin estrategia nacional.
Con mucho anuncio y pocas nueces.
No importa dónde nos fijemos. Donde no reina la improvisación lo hace el delirio o la práctica de anunciar proyectos sin sustento ni base presupuestaria.
Tal vez me equivoque y tenga que reconocer que han diseñado un plan criterioso y consistente con sus intenciones: tratar de ir tirando con el eco de los grandes anuncios vacíos (como nido en invierno), mientras las otras promesas se apagan (la contratación de 2000 nuevos policías, los patrullajes del ejército en las zonas de riesgo, subir la edad de jubilación, nacionalizar las AFAPs y agreguen Uds. todas las que sepan recordar).
Más vale que nos sobren ciclovías aunque nos falten veredas para los peatones.



Finalmente, la Biblioteca Nacional está abierta para todos aquellos que entren en Instagram o en Tik Tok. ¿Me hablaban de renovación? ¡Ahí la tienen! ¿Qué más quieren? Mientras, las verdaderas puertas del futuro y de la cultura permanecen cerradas.
Auspiciosamente, llegan anuncios de inversiones multimillonarias por parte de alguna empresa incapaz de sostener la capitalización anunciada (5.700 millones de dólares); que, presumiblemente, podría intentar ganar prestigio gracias al autorizado anuncio anticipado de nuestro presidente Orsi.
Hay cifras reales que crecen: el cierre de empresas, la inseguridad…
Sin brújula política, con menos ideas que Bergara y ni siquiera con ganas de laburar.
Que el tiempo pase. Algo saldrá muchachos. Podemos encontrar oro en Isla Patrulla, una nueva oportunidad para instalar una regasificadora en Punta Espinillo o un nuevo *shingle*.
¿Qué tal una represa para instalar una planta potabilizadora en el arroyo Casupá? Sería una magnífica idea si no fuese porque la cuenca de ese arroyo es la misma que alimenta el Río Santa Lucía. Y una sequía, como la que sufrimos en 2023, es bastante previsible que vuelva a producirse debido al cambio climático. Con muchas probabilidades de que pueda suceder en el año siguiente al de un próximo fenómeno de El Niño (como este que nos visita); y, cuando este generase un excesivo calentamiento en las aguas del Atlántico Norte, sería capaz de provocar una inversión retardada en la circulación del aire frío polar que traería lluvias intensas en otras partes, pero grandes sequías por estas latitudes.
¿No les parece demasiado complicado? Afuera llueve, mañana capaz que llueve. Hagamos la represa en Casupá. Está decidido. Y, si se rompe, en vez de patrulleras compramos botes para las poblaciones ribereñas de Bolívar, San Ramón y Fray Marcos.
No hay plata. Los funcionarios de nuestra administración pública están autorizados a usar su propio modelo de inteligencia artificial (gratuito o pago, el de su propio celular) para filtrar los datos públicos a nuestra cuenta y riesgo.
Habrá que ir tirando para poder hacer las cosas bien despacio y como es debido: hasta que se contrate una consultoría en cada dependencia que pueda preciarse de gozar de autonomía. Así, la empresa externa y calificada estará en condiciones de elaborar un detallado informe generado por la propia inteligencia artificial que por fin nos diga cómo, dónde, cuándo y en beneficio de quiénes utilizar la inteligencia artificial.
Un Smart TV de primera generación seguramente es más smart. ¡Están claritos!
¿Y mientras tanto? Sorpréndannos muchachos. Pucha, que se hace largo llegar al año previo de las elecciones para emprender, todas juntas, las obras que al próximo gobierno le va a tocar pagar.
(Léase mientras escucha el siguiente *track*: Los Olimareños, Isla Patrulla: https://www.youtube.com/watch?v=JWrhHchC-Ag&list=RDJWrhHchC-Ag&start_radio=1)

¿Pedro III o Lula 4?

Julio María SANGUINETTI
Periodista. Abogado. Senador. Fue secretario general del Partido Colorado y presidente de la República. FUENTE: diario LA NACIÓN



El presidente de Brasil ya está en la gran historia; puede, sin embargo, subir algunos escalones más, o bajarlos a un nivel que a todos nos empobrecería

Cuando asumió Lula esta tercera presidencia tuvimos la oportunidad de asistir a la ceremonia, acompañando al presidente Lacalle Pou, que nos invitó junto al colega Mujica. Esperábamos, dada la notable circunstancia de sus dos presidencias anteriores y un retorno triunfal luego de haber estado hasta preso, un Lula Pedro III, una suerte de emperador popular que convocaba a la unidad nacional, con un espíritu amplio y generoso. Desgraciadamente no fue así y ya desde el primer discurso hubo un aliento de revancha en el que predominaba el antibolsonarismo.

No ha sido un gobierno a la altura de los anteriores. Su política exterior se empequeñeció con un trasnochado intento de armar un bloque de izquierda con un par de gobiernos en eclipse, mientras se asumía hostil a los EE.UU. Termina ahora su mandato con un déficit que se aproxima al 10% del PBI, una deuda que ha trepado al 83% del PBI y unos intereses de 13,75%, los más altos de la región, que paga la sufrida clase media. La presión fiscal es del orden del 35%, también récord, y esto le está marcando un límite a la gestión que iniciará en enero. Ya la reacción de los mercados ha sido muy negativa, con suba del dólar y caída de las acciones en la bolsa brasileña y en los mercados internacionales.



El resultado nuevamente fue sorpresivo, como había ocurrido ya en la primera vuelta. Las encuestas instalaron falsos favoritismos y, por más que ahora aleguen que en los últimos días registraban un leve repunte de Lula, ninguna lo dio ganando. Ni intuyeron una verdadera remontada épica. Es un triunfo personal incuestionable, propio de un liderazgo popular capaz de hazañas.

De origen humildísimo, trabajando desde los 14 años en una fábrica de tornillos, emergió como un líder sindical de enorme peso en el sector metalúrgico. Si bien condujo numerosos conflictos, se instaló como un gran interlocutor del empresariado brasileño. De algún modo pasó a ser parte del *establishment* y se lanzó a la vida política, con candidaturas presidenciales en 1989, 1994 y 1998, las dos últimas perdiendo ante Fernando Henrique Cardoso. Cuando triunfó en 2002, llamé a mi colega, el presidente Sarney, para pedirle una opinión sobre ese obrero que llegaba al Planalto. Su respuesta fue: *«... No te preocupes, es alguien que sabe el valor de un 2%...»*. Dicho de otro modo, es un negociador de oficio, lejos de los maximalismos de la izquierda radical. Y así fue.

Esta campaña ha sido institucionalmente penosa. Recién el último debate tuvo algún contenido, pero fueron más las descalificaciones y acusaciones cruzadas. Ni hablar de la Justicia, que se transformó en un foro de polémicas con una parcialidad extrema de los magistrados que parecían diputados en debate más que intérpretes de las leyes. El mismo día de la elección, la tardía y abrupta prórroga de la hora decretada por un juez de la Suprema Corte, en solitario y sin competencia jurisdiccional, fue un real frangollo, con algunas mesas ya cerradas que no sabían qué hacer. Con un resultado como el que se dio y sin lesión del derecho a votar, no parece justificarse el anunciado reclamo de anular la elección, pero no deja de ser otra expresión de esa Justicia desjerarquizada. Que al día siguiente el juez Moraes ya le retirara el pasaporte a Flavio Bolsonaro fue una pésima señal de una intención manifiesta de llevarlo a una condena. La esposa de ese juez tuvo un contrato de asistencia jurídica por unos 24 millones de dólares con el Banco Master, del banquero Vorcaro, y se conoció una segunda propuesta contractual por más de nueve millones de dólares con otra empresa del mismo empresario, que pedía consejos al mismo magistrado sobre qué hacer con las denuncias en su contra. Hoy es tan emplazado él como el candidato perdidoso.

Ante la inminencia de un juicio sin garantías, intempestivamente Flavio Bolsonaro se va a los EE.UU. Podemos entenderlo en un ciudadano común que se siente perseguido de antemano. No en alguien que acaba de ser votado por 60 millones de personas, asumiendo un liderazgo que impone pesados deberes, como el de seguir luchando por los suyos en su propio país. No muestra pruebas del fraude e invoca un liderazgo que a nuestro juicio se irá desvaneciendo, porque no veo a los gobernadores afines y a sus parlamentarios dispuestos a atarse indefinidamente al carro de esa turbulenta familia Bolsonaro, cuando emergen ya opciones tan válidas como la Tarsicio de Freitas, exitoso gobernador de San Pablo.

En un orden más general la elección reitera que el Brasil ha consolidado una división electoral de raíz sociológica: el norte más pobre, beneficiario principal de las ayudas del Estado, votando al PT; y el sur de la producción agrícola e industrial haciéndolo por quien esté en contra del PT, en este caso un Bolsonaro, mañana probablemente otro. Ya no está presente el viejo Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que lideró Fernando Henrique Cardoso y tuvo en su tiempo de candidato al mismo Geraldo Alckmin, dos veces gobernador de San Pablo, candidato a la presidencia, derrotado justamente por Lula en 2006 y ahora su vice, electo y reelecto. No hay una expresión de centro democrático, como viene ocurriendo en toda América, aunque en Brasil el viejo *Centrão* parlamentario se integra por un grupo de legisladores moderados que normalmente van pactando con los gobiernos sean de donde sean.

Una vez más, el fiel de la balanza ha sido Minas Gerais, el único Estado en que revirtió la candidatura, pasando de Bolsonaro a Lula. Se reitera que no se puede ganar sin esa cuna de grandes políticos, como los presidentes Juscelino Kubitschek y Tancredo Neves, ambos gobernadores del estado. Durante su gestión como alcalde de Belo Horizonte, Kubitschek impulsó la obra del arquitecto Niemeyer, con quien modernizó la ciudad como preludio de la nueva Versalles racionalista que fue Brasilia, pensada para que el Brasil de la costa cediera espacio a una visión territorial más amplia desde el Planalto.

Vuelve Lula a tener en sus manos la opción inicial. ¿Predominará la idea del emperador del pueblo o un Lula 4 mero continuador del actual? ¿Tendrá la grandeza de indultar al padre para pacificar al país y dejar sin sustento la opción de Flavio por la escapada? Para no ser *«el patio trasero de nadie»*, ¿volverá a enfrentar a los EE.UU., ahora que ya no tiene cómo formar un bloque de izquierda latinoamericana? ¿Procurará rescatar el prestigio del gran Brasil que asomó después de la dictadura con Tancredo, Sarney y Fernando Henrique o continuará sin entender que persiguiendo al clan Bolsonaro solo se empequeñece él?

La opción está abierta. Lula ya está en la gran historia. Puede, sin embargo, subir algunos escalones más. O bajarlos a un nivel que a todos nos empobrecería.